

Señores

JUZGADO SEXTO (6°) CIVIL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

cmpl06vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

PROCESO: VERBAL
DEMANDANTES: LEOPOLDO ALONSO CORTEZ DEL VILLAR Y OTROS.
DEMANDADOS: ALLIANZ SEGUROS S.A. Y OTROS.
RADICADO: 500014003006-2024-00948-00

ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado general de **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, sociedad anónima, sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, identificada con **NIT No. 860.026.182-5**, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., según consta en el certificado de existencia y representación legal que se anexa, en donde figura inscrito el poder general conferido al suscrito a través de la Escritura Pública No. 5107, otorgada el 05 de mayo de 2004 en la Notaría Veintinueve (29) del Círculo de Bogotá, procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** promovida por Leopoldo Alonso Cortez y otros en contra de mi representada y otros; anunciando desde ahora que me opongo a las pretensiones de la demanda de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

CAPÍTULO I
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

FRENTE AL HECHO “PRIMERO”: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse al Despacho que no se encuentra acreditado dentro del proceso que el señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar estuviera trabajando al momento del accidente, por lo que su afirmación en ese sentido carece de sustento probatorio.

FRENTE AL HECHO “SEGUNDO”: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

FRENTE AL HECHO “TERCERO”: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas **por ALLIANZ SEGUROS S.A.**, Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin perjuicio de lo anterior, es dable advertir del informe policial de accidente de tránsito No. A00-

1562760 que en efecto este fue suscrito por el agente Jonathan Steven Giraldo, quien se identificó con la C.C. 86086126 y placas 161-209.

FRENTE AL HECHO “CUARTO”: No es cierto que el informe policial de accidente de tránsito No. A00-1562760 que en efecto este fue suscrito por el agente Jonathan Steven Giraldo, se pueda “observar que la señora Laura Valentina Torrado Gómez impacta al señor Leopoldo Alonzo Cortez”. Ya que no puede pasar inadvertido para el Despacho la orfandad probatoria con la cual los actores pretenden acreditar la afirmación concerniente a que fue el conductor del vehículo de placas LGK783 quien impacta al peatón, ya que no obra en el plenario elemento material alguno el cual así lo acredite. Además, es menester indicar que IPAT constituye un documento que solo da cuenta de las circunstancias de tiempo y lugar que rodearon el suceso, de los vehículos y sujetos involucrados, **mas no corresponde a un dictamen de responsabilidad**. Debe tener en cuenta el Despacho que lo que se consigna en el Informe Policial del Accidente corresponde a una mera HIPÓTESIS (que según la Real Academia Española es la “suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia”), realizada por un agente de tránsito que no estuvo presente en el momento de la colisión y que por ende no pudo observar la dinámica de la colisión, razón por la cual, NO podrá ser considerada como plena prueba dentro del presente trámite judicial.

Además, tal y como se advierte del Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT), este no asigna una codificación específica a ninguno de los involucrados, sino que se limita a consignar “la hipótesis 157” de manera general. Por lo tanto, no es cierto que del IPAT pueda inferirse con certeza lo que sostiene la parte demandante, ya que el documento no determina de manera individualizada la codificación de cada interviniente en accidente de tránsito.

FRENTE AL HECHO “QUINTO”: Como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas de la siguiente manera:

- Respecto de la manifestación que indica presuntamente quién conducía el vehículo de placas LGK783 el día del accidente **no me consta**, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.
- Ahora bien, respecto de la titularidad del automotor. Se observa que lo aquí expuesto es cierto de acuerdo con las pruebas documentales que obran en el plenario. Sin embargo, esta representación se atiene a lo consagrado en el certificado de tradición del automotor placas LGK783.

FRENTE AL HECHO “SEXTO”: Solo es cierto que del Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A00-1562760 se puede extraer que fue suscrito por el agente Jonathan Steven Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía No. 86086126 y placas 161-209. Sin embargo, dado que el vehículo de placas LGK783 fue movido del sitio del accidente y ni siquiera se pudo elaborar el croquis del accidente de tránsito, es importante precisar que el IPAT es un documento que únicamente registra las circunstancias de tiempo, modo y lugar del evento, así como la identificación de los vehículos y sujetos involucrados, pero **no constituye un dictamen de responsabilidad**. Debe tener en cuenta el Despacho que lo que se consigna en el Informe Policial del Accidente corresponde a una mera HIPÓTESIS (que según la Real Academia Española es la “suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia”), realizada por un agente de tránsito que no estuvo presente en el momento de la colisión y que por ende no pudo observar la dinámica de la colisión, razón por la cual, NO podrá ser considerada como plena prueba dentro del presente trámite judicial.

Sobre el particular, puede apreciarse que el agente de tránsito en el IPAT se refirió expresamente

sobre el bosquejo topográfico. Véase

13. OBSERVACIONES						
Se hace bosquejo topográfico ya que el Vehículo se movió del sitio del accidente. Se solicita dictamen de Embriaguez al Proton Pro el medico de turno (Clinica Sirmedicos no Entrega Resultado)						
14. ANEXO		ANEXO I (Conductores, Vehículos)		ANEXO II (Conductores, Vehículos)		
15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE						
GRUPO	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	IDENTIFICACION	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
AG	Josethu Staku Gardo	CC 86036126	161-709	S.M	Josethu Gardo	
16. CORRESPONDIO						
NUMERO UNICO DE INVESTIGACION		51000116100512370123A01195				fiscalia

Documento: Informe Policial de Accidentes de Tránsito No. A00-1562760

Transcripción parte esencial: “Se hace bosquejo topográfico ya que el vehículo se movió del sitio del accidente”

Además, tal y como se advierte del Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT), este no asigna una codificación específica a ninguno de los involucrados, sino que se limita a consignar “la hipótesis 157” de manera general. Por lo tanto, no es cierto que del IPAT pueda inferirse con certeza lo que sostiene la parte demandante, ya que el documento no determina de manera individualizada la codificación de cada interviniente en accidente de tránsito.

FRENTE AL HECHO “SÉPTIMO”: No es cierto que el video mencionado pruebe los hechos en los términos planteados por la parte demandante. Si bien podría existir una grabación del evento, su contenido, autenticidad, legalidad y valor probatorio deberán ser evaluados dentro del proceso, en tanto el mismo será objeto de ratificación conforme se establece en el artículo 262 del Código General del Proceso.

FRENTE AL HECHO “OCTAVO”: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo

caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin perjuicio de lo anterior, desde este momento es preciso advertir que la historia clínica del señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar refleja la presencia de una enfermedad degenerativa, lo que evidencia que sus trastornos discales y afecciones en la región lumbosacra no necesariamente guardan relación con los hechos objeto del proceso. En consecuencia, no puede atribuirse de manera automática al accidente la totalidad de sus dolencias, pues estas podrían derivarse de una condición preexistente y no del accidente de tránsito en cuestión.

FRENTE AL HECHO “NOVENO”: Se observa que lo aquí expuesto es cierto de acuerdo con las pruebas documentales que obran en el plenario.

FRENTE AL HECHO “DECIMO”: Lo manifestado por el vocero judicial no corresponde a un hecho que pueda ser contestado en los términos del artículo 96 del Código General del Proceso, máxime cuando se manifiestan circunstancias subjetivas que aún no se encuentran probadas en el proceso. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que no puede probarse que el accidente de tránsito que suscitó el presente litigio se originó a causa del conductor del vehículo de placas LGK783, toda vez que no se aportaron medios de prueba fehaciente que permitan colegir la responsabilidad civil que se pretende endilgar. Al respecto, se itera que el IPAT es un documento que solo da cuenta de las circunstancias de tiempo y lugar que rodearon el suceso, de los vehículos y sujetos involucrados, mas **no corresponde a un dictamen de responsabilidad.**

Además, tal y como se advierte del Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT), este no asigna una codificación específica a ninguno de los involucrados, sino que se limita a consignar “la hipótesis 157” de manera general. Por lo tanto, no es cierto que del IPAT pueda inferirse con certeza lo que sostiene la parte demandante, ya que el documento no determina de manera individualizada la

codificación de cada interviniente en accidente de tránsito.

Asimismo, deberá analizarse la participación de terceros en la ocurrencia del accidente, en particular, la del propietario del vehículo que se encontraba estacionado de manera indebida en la Central de Abastos de Villavicencio, cuya presencia pudo haber influido en la dinámica del accidente de tránsito. Igualmente, es relevante examinar la conducta de la víctima, quien se encontraba en una zona de tránsito vehicular con la aparente intención de descargar mercancía, pese a que dicho espacio está destinado para la circulación de vehículos.

FRENTE AL HECHO “DECIMO PRIMERO”: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

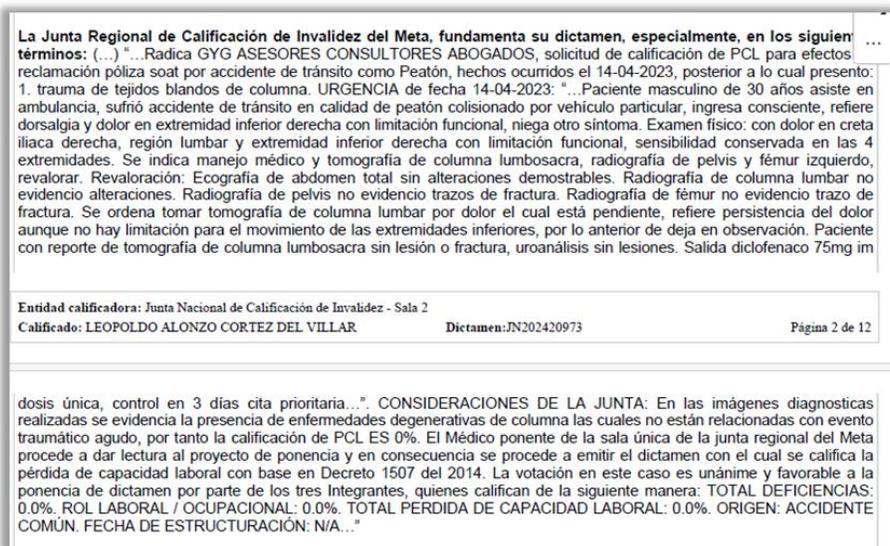
FRENTE AL HECHO “DECIMO SEGUNDO”: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

FRENTE AL HECHO “DECIMO TERCERO”: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las

oportunidades procesales previstas para ello.

FRENTE AL HECHO “DECIMO CUARTO”: Se observa que lo aquí expuesto es cierto de acuerdo con las pruebas documentales que obran en el plenario. Sin embargo, de manera preliminar se anticipa que en el acápite de pruebas se solicitará su contradicción, en tanto corresponderá al debate probatorio determinar si las consideraciones y conclusiones de dicha entidad guardan relación directa con secuelas derivadas del accidente referido en la demanda, o si, por el contrario, obedecen a enfermedades o patologías previas del paciente.

Además, es importante advertir que este señor ya había sido valorado por la Junta Regional de Calificación del meta, la cual evidenció la *presencia de enfermedades degenerativas de columna las cuales no están relacionadas con evento traumático agudo*. Tal y como se evidencia a continuación:



Documento: *Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral – Consideraciones de la La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta.*

FRENTE AL HECHO “DECIMO QUINTO”: Lo manifestado por el vocero judicial no corresponde a un hecho que pueda ser contestado en los términos del artículo 96 del Código General del Proceso, máxime cuando se manifiestan circunstancias subjetivas que aún no se encuentran probadas en el proceso. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que no puede probarse que el accidente de tránsito que suscitó el presente litigio se originó a causa del conductor del vehículo de placas LGK783, toda vez que no se aportaron medios de prueba fehaciente que permitan colegir la responsabilidad civil que se pretende endilgar. Al respecto, se itera que el IPAT es un documento que solo da cuenta de las circunstancias de tiempo y lugar que rodearon el suceso, de los vehículos y sujetos involucrados, mas **no corresponde a un dictamen de responsabilidad.**

Asimismo, deberá analizarse la participación de terceros en la ocurrencia del accidente, en particular, la del propietario del vehículo que se encontraba estacionado de manera indebida en la Central de Abastos de Villavicencio, cuya presencia pudo haber influido en la dinámica del accidente de tránsito. Igualmente, es relevante examinar la conducta de la víctima, quien se encontraba en una zona de tránsito vehicular con la aparente intención de descargar mercancía, pese a que dicho espacio está destinado para la circulación de vehículos.

FRENTE AL HECHO “DECIMO SEXTO”: Es cierto que, el vehículo de placas LGK783 marca MITSUBISHI modelo 2023, para el momento del accidente de tránsito del 14 de abril de 2023, contaba con amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual materializado con la Póliza de Seguro Autos Clónico Livianos Particulares No. 023056430 / 2658 expedida por mi representada.

No obstante, desde este momento el Despacho deberá tener en cuenta que esta no podrá ser afectada por los hechos que se debaten en este litigio, en la medida que la accionante no cumplió con las cargas del artículo 1077 del Código de Comercio, por cuanto no se demostró un nexo de causalidad entre la conducta desplegada por el conductor del vehículo asegurado y los daños alegados por los actores, es decir, no se demostró la realización del riesgo asegurado ante la

existencia de participación de terceros en la ocurrencia del accidente, en particular, la del propietario del vehículo que se encontraba estacionado de manera indebida en la Central de Abastos de Villavicencio, cuya presencia pudo haber influido en la dinámica del accidente de tránsito.

Adicionalmente, no se acreditó la cuantía de la pérdida, en tanto los perjuicios se solicitan de forma exorbitante y con base en un dictamen de pérdida de capacidad laboral que de manera preliminar se anticipa que en el acápite de pruebas se solicitará su contradicción, en tanto corresponderá al debate probatorio determinar si las consideraciones y conclusiones de dicha entidad guardan relación directa con secuelas derivadas del accidente referido en la demanda, o si, por el contrario, obedecen a enfermedades o patologías previas del accidentado.

FRENTE AL HECHO “DÉCIMO SEPTIMO”: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

FRENTE AL HECHO “DECIMO SEXTO (SIC)”: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

No obstante, desde este punto es fundamental señalar la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Mayra Lissett Rodríguez Uzcátegui, en virtud de lo dispuesto en la Ley 979 de 2005, la cual establece los requisitos para acreditar la unión marital de hecho. En el presente caso, la

parte demandante no ha aportado prueba idónea y suficiente que permita demostrar la existencia de dicho vínculo en los términos exigidos por la ley.

FRENTE AL HECHO “DÉCIMO SEPTIMO (SIC)”: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

No obstante, desde este punto, es necesario resaltar la falta de legitimación en la causa por activa en cabeza de Luhanna Isabella Fernández Saez, toda vez que no tiene ningún vínculo legal ni probatorio con la víctima. Sus padres biológicos son personas ajenas al señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, y no existe ningún elemento de prueba que permita acreditar la supuesta calidad de "hija de crianza" que pretende hacer valer.

Del mismo modo, Maryini Kirimer Fernández Rodríguez tampoco ha demostrado de manera fehaciente la calidad de hija de crianza respecto de la víctima, máxime su edad al momento del accidente, por lo que su reclamación carece de fundamento legal. En ausencia de pruebas que sustenten tales vínculos familiares, resulta improcedente su reconocimiento como legitimadas dentro del proceso.

FRENTE AL HECHO “DÉCIMO OCTAVO (SIC)”: Si bien no se entiende a que hace referencia el presente hecho en cuanto indica “Lo anterior, con fundamento (...) cuando los vehículos que están sometidos a una actividad peligrosa”, si lo inmediatamente anterior hace referencia a supuestas afectaciones en los demandantes. Sin embargo, lo manifestado por el vocero judicial no corresponde a un hecho que pueda ser contestado en los términos del artículo 96 del Código General del Proceso, máxime cuando se manifiestan circunstancias subjetivas que aún no se

encuentran probadas en el proceso. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que no puede probarse que el accidente de tránsito que suscitó el presente litigio se originó a causa del conductor del vehículo de placas LGK783, toda vez que no se aportaron medios de prueba fehaciente que permitan colegir la responsabilidad civil que se pretende endilgar. Al respecto, se itera que el IPAT es un documento que solo da cuenta de las circunstancias de tiempo y lugar que rodearon el suceso, de los vehículos y sujetos involucrados, mas **no corresponde a un dictamen de responsabilidad.**

Ello porque a su vez, deberá analizarse la participación de terceros en la ocurrencia del accidente, en particular, la del propietario del vehículo que se encontraba estacionado de manera indebida en la Central de Abastos de Villavicencio, cuya presencia pudo haber influido en la dinámica del accidente de tránsito.

FRENTE AL HECHO “DECIMO NOVENO (SIC)”: Lo manifestado por el vocero judicial no corresponde a un hecho que pueda ser contestado en los términos del artículo 96 del Código General del Proceso, máxime cuando se manifiestan circunstancias legales y subjetivas que aún no se encuentran probadas en el proceso. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que no puede probarse una Imputación, Daño y Fundamento del Deber de Reparar en cabeza del conductor del vehículo de placas LGK783, toda vez que no se aportaron medios de prueba fehaciente que permitan colegir la responsabilidad civil que se pretende endilgar. Al respecto, se itera que el IPAT es un documento que solo da cuenta de las circunstancias de tiempo y lugar que rodearon el suceso, de los vehículos y sujetos involucrados, mas **no corresponde a un dictamen de responsabilidad.**

Asimismo, deberá analizarse la participación de terceros en la ocurrencia del accidente, en particular, la del propietario del vehículo que se encontraba estacionado de manera indebida en la Central de Abastos de Villavicencio, cuya presencia pudo haber influido en la dinámica del accidente de tránsito. Igualmente, es relevante examinar la conducta de la víctima, quien se encontraba en una zona de tránsito vehicular con la aparente intención de descargar mercancía, pese a que dicho espacio está destinado para la circulación de vehículos.

FRENTE AL HECHO “VIGESIMO” (SIC): Se observa que lo aquí expuesto es cierto de acuerdo con las pruebas documentales que obran en el plenario. En todo caso, el ofrecimiento realizado no constituye una aceptación de responsabilidad por parte de la aseguradora, sino una manifestación de buena fe dentro del proceso conciliatorio. Dicho ofrecimiento tuvo como finalidad propiciar una solución alternativa al conflicto, evitando el trasegar y desgaste propio de un proceso judicial, tanto para las partes como para la administración de justicia. Sin embargo, el hecho de presentar una propuesta de conciliación no implica reconocimiento alguno sobre la existencia de los daños alegados, su cuantía o la presunta responsabilidad del asegurado en los hechos materia del litigio.

FRENTE AL HECHO “VIGESIMO PRIMERO” (SIC): Se observa que lo aquí expuesto es cierto de acuerdo con las pruebas documentales que obran en el plenario. En todo caso, el ofrecimiento realizado no constituye una aceptación de responsabilidad por parte de la aseguradora, sino una manifestación de buena fe dentro del proceso conciliatorio. Dicho ofrecimiento tuvo como finalidad propiciar una solución alternativa al conflicto, evitando el trasegar y desgaste propio de un proceso judicial, tanto para las partes como para la administración de justicia. Sin embargo, el hecho de presentar una propuesta de conciliación no implica reconocimiento alguno sobre la existencia de los daños alegados, su cuantía o la presunta responsabilidad del asegurado en los hechos materia del litigio.

FRENTE AL HECHO “VIGESIMO SEGUNDO” (SIC): Se observa que lo aquí expuesto es cierto de acuerdo con las pruebas documentales que obran en el plenario. Sin embargo, lo discutido allí se rige por el principio de confidencialidad dispuesta en el Estatuto de Conciliación (Ley 2220 de 2022).

FRENTE AL HECHO “VIGESIMO TERCERO” (SIC): Si bien de la transcripción del acta de conciliación se desprende que en la audiencia realizada el 12 de noviembre de 2024, Seguros ALLIANZ efectuó un ofrecimiento por valor de \$20.000.000, es preciso señalar que lo discutido en el marco de una audiencia de conciliación se rige por el principio de confidencialidad dispuesto en

el Estatuto de Conciliación (Ley 2220 de 2022).

En todo caso, el ofrecimiento realizado no constituye una aceptación de responsabilidad por parte de la aseguradora, sino una manifestación de buena fe dentro del proceso conciliatorio. Dicho ofrecimiento tuvo como finalidad propiciar una solución alternativa al conflicto, evitando el trasegar y desgaste propio de un proceso judicial, tanto para las partes como para la administración de justicia. Sin embargo, el hecho de presentar una propuesta de conciliación no implica reconocimiento alguno sobre la existencia de los daños alegados, su cuantía o la presunta responsabilidad del asegurado en los hechos materia del litigio.

FRENTE AL HECHO “VIGESIMO CUARTO” (SIC)”: Si bien de la transcripción del acta de conciliación se desprende la existencia de ánimo conciliatorio, es preciso señalar que lo discutido en el marco de una audiencia de conciliación se rige por el principio de confidencialidad dispuesto en el Estatuto de Conciliación (Ley 2220 de 2022).

En todo caso, el ofrecimiento realizado no constituye una aceptación de responsabilidad por parte de la aseguradora, sino una manifestación de buena fe dentro del proceso conciliatorio. Dicho ofrecimiento tuvo como finalidad propiciar una solución alternativa al conflicto, evitando el trasegar y desgaste propio de un proceso judicial, tanto para las partes como para la administración de justicia. Sin embargo, el hecho de presentar una propuesta de conciliación no implica reconocimiento alguno sobre la existencia de los daños alegados, su cuantía o la presunta responsabilidad del asegurado en los hechos materia del litigio.

FRENTE AL HECHO “VIGÉSIMO QUINTO (SIC)”: Lo manifestado por el vocero judicial no corresponde a un hecho que pueda ser contestado en los términos del artículo 96 del Código General del Proceso, máxime cuando se manifiestan circunstancias netamente legales y subjetivas que aún no se encuentran probadas en el proceso. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que no puede probarse que el accidente de tránsito que suscitó el presente litigio se originó a causa del

conductor del vehículo de placas LGK783, toda vez que no se aportaron medios de prueba fehaciente que permitan colegir la responsabilidad civil que se pretende endilgar. Al respecto, se itera que el IPAT es un documento que solo da cuenta de las circunstancias de tiempo y lugar que rodearon el suceso, de los vehículos y sujetos involucrados, mas **no corresponde a un dictamen de responsabilidad.**

Ello porque a su vez, deberá analizarse la participación de terceros en la ocurrencia del accidente, en particular, la del propietario del vehículo que se encontraba estacionado de manera indebida en la Central de Abastos de Villavicencio, cuya presencia pudo haber influido en la dinámica del accidente de tránsito. Igualmente, es relevante examinar la conducta de la víctima, quien se encontraba en una zona de tránsito vehicular con la aparente intención de descargar mercancía, pese a que dicho espacio está destinado para la circulación de vehículos.

FRENTE AL HECHO “VIGÉSIMO QUINTO (SIC)”: No es cierto. Debe decirse que lo enunciado no es un hecho sino una serie de consideraciones subjetivas, sin sustento fáctico y/o probatorio alguno, realizadas por el apoderado de la parte demandante. Razón por la cual, deberá cumplirse la carga establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso y de esta forma el demandante debe probar sus dichos a través de los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

ME OPONGO a la totalidad de las pretensiones incoadas por la parte demandante, por cuanto las mismas carecen de fundamentos facticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, comoquiera que al hacer la narración de los hechos se pretende imputar una supuesta responsabilidad civil extracontractual, la cual como se establecerá dentro del proceso, no se estructuró, por cuanto la parte accionante no asistió a su deber procesal de la carga de la prueba tanto de la supuesta culpa, del daño, de la cuantía del aparente detrimento y el nexo de causalidad entre uno y el otro. Siendo así, en este proceso se incumplieron las cargas imperativas de que trata el artículo 1077 del Código

de Comercio.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “PRIMERO”: ME OPONGO a la prosperidad de la pretensión de declarar civil y solidariamente responsable al extremo pasivo del litigio en atención a que al interior del expediente no obran elementos probatorios que permitan acreditar la existencia de responsabilidad de los supuestos daños y perjuicios ocasionados a la parte demandante derivados del accidente de tránsito acontecido el 14 de abril de 2023. Sin perjuicio de ello, me opongo concretamente así:

- Según las documentales que obran en el plenario no se dejó acreditado el nexo causal, ello en razón a la falta de comprobación de la causa precisa que provocó el accidente, situación demostrada por la carencia probatoria que existe. Lo anterior, por cuanto *(i)* no se encuentran acreditados los presupuestos axiales de la responsabilidad civil puesto que los medios probatorios allegados por el extremo actor carecer de virtualidad para la declaratoria de responsabilidad debido a que el IPAT únicamente consagra una hipótesis sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que ocurrieron los hechos que suscitaron la presente litis *(ii)* pese a la hipótesis plasmada en este, no se logró realizar bosquejo topográfico de la posición final de los implicados pues el vehículo fue movido *(iii)* se debe analizar la participación de terceros en la ocurrencia del accidente, en particular, la del propietario del vehículo que se encontraba estacionado de manera indebida en la Central de Abastos de Villavicencio, cuya presencia pudo haber influido en la dinámica del accidente de tránsito. Igualmente, es relevante examinar la conducta de la víctima, quien se encontraba en una zona de tránsito vehicular con la aparente intención de descargar mercancía, pese a que dicho espacio está destinado para la circulación de vehículos. y *(iv)* tampoco hay certeza sobre los perjuicios que cuyo resarcimiento pretende la parte actora pues, como se ahondará en líneas posteriores, en tanto estos se solicitan de forma exorbitante y con base en un dictamen de pérdida de capacidad laboral que de manera preliminar se anticipa que en el acápite de pruebas se solicitará su contradicción, en tanto

corresponderá al debate probatorio determinar si las consideraciones y conclusiones de dicha entidad guardan relación directa con secuelas derivadas del accidente referido en la demanda, o si, por el contrario, obedecen a enfermedades o patologías previas del accidentado.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “SEGUNDA”: ME OPONGO. La solicitud de la parte demandante para que se reconozca a ALLIANZ SEGUROS S.A. en condición de subrogada del asegurado es improcedente y jurídicamente inviable por que la subrogación supone el pago de la indemnización al asegurado y la existencia de un tercero responsable. No obstante, en este caso, la parte demandante pretende que la aseguradora se subrogue en el asegurado, cuando al mismo tiempo lo señala como el causante del accidente, lo que es incompatible con la naturaleza misma de la subrogación. Luego, si ALLIANZ SEGUROS S.A. ha expedido una póliza de responsabilidad civil extracontractual a favor del propietario del vehículo asegurado, esta tiene por objeto precisamente cubrir la responsabilidad del asegurado frente a terceros, y no permitir que la aseguradora se subrogue contra él mismo. Lo anterior, sin que implique de ninguna manera declaración de responsabilidad.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “TERCERO”: ME OPONGO a la prosperidad de la pretensión de condenar al extremo pasivo del litigio en atención a que al interior del expediente no obran elementos probatorios que permitan acreditar la existencia de responsabilidad de los supuestos daños y perjuicios ocasionados a la parte demandante derivados del accidente de tránsito acontecido el 14 de abril de 2023. Ahora bien, sumado a lo anterior, procederé a pronunciarme en relación con cada perjuicio solicitado, de la siguiente manera:

OPOSICIÓN A LA PRETENSIÓN No. “1. Perjuicios Materiales”: ME OPONGO a esta pretensión por sustracción de materia, en tanto que resulta consecencial a la primera pretensión, y al ser improcedente, esta también debe ser desestimada frente al extremo pasivo. Sin perjuicio de ello, me opongo concretamente así:

- Oposición frente al **PERJUICIO MORAL** de **LEOPOLDO ALONZO CORTEZ DEL VILLAR**: No hay lugar a reconocimiento alguno por concepto de daños morales en favor de LEOPOLDO ALONZO CORTEZ DEL VILLAR, dado que no existe responsabilidad en cabeza de la parte pasiva dentro del presente asunto. Además, es inviable el reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por la parte demandante, por cuanto la tasación propuesta es exorbitante, y en tal sentido, en el improbable e hipotético caso que dicho concepto sea reconocido, no hay lugar al pago de suma alguna que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.
- Oposición frente al **PERJUICIO MORAL** de **LUHANNA ISABELLA FERNANDEZ SAEZ**: No hay lugar al reconocimiento de perjuicio moral en favor de Luhanna Isabella Fernández Saez, toda vez que no existe un vínculo de parentesco con el señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar. Según el acta de nacimiento que obra en el plenario, sus padres biológicos son personas distintas y ajenas a la víctima, lo que evidencia que la relación filial que pretende hacer valer carece de sustento probatorio. En este sentido, al no configurarse un vínculo legal o debidamente acreditado de "hija de crianza", **su perjuicio moral no se presume**, sino que debe ser demostrado conforme a las exigencias probatorias. En consecuencia, no hay lugar a su reconocimiento, y menos aún en la suma exorbitante pretendida por la parte demandante, pues en el improbable e hipotético caso de que se aceptara dicha reclamación, debería someterse a los parámetros fijados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
- Oposición frente al **PERJUICIO MORAL** de **MARYINI KIRIMER FERNANDEZ RODRIGUEZ**: No hay lugar al reconocimiento de perjuicio moral en favor de Maryini Kirimer Fernandez Rodriguez, toda vez que no existe un vínculo de parentesco con el señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar. Según el acta de nacimiento que obra en el plenario, sus padres biológicos son personas distintas y ajenas a la víctima, lo que evidencia que la

relación filial que pretende hacer valer carece de sustento probatorio. En este sentido, al no configurarse un vínculo legal o debidamente acreditado de "hija de crianza", **su perjuicio moral no se presume**, sino que debe ser demostrado conforme a las exigencias probatorias. En consecuencia, no hay lugar a su reconocimiento, y menos aún en la suma exorbitante pretendida por la parte demandante, pues en el improbable e hipotético caso de que se aceptara dicha reclamación, debería someterse a los parámetros fijados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia..

- Oposición frente al **PERJUICIO MORAL** de **MAYRA LISSETT RODRIGUEZ UZCATEGUI**: No hay lugar a reconocimiento alguno por concepto de daños morales en favor de **MAYRA LISSETT RODRIGUEZ UZCATEGUI**, dado que no existe responsabilidad en cabeza de la parte pasiva dentro del presente asunto. Además, no ha probado la calidad de compañera permanente del señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, conforme a lo establecido en la Ley 979 de 2005, que exige acreditación formal de la unión marital de hecho para que se reconozcan derechos derivados de la misma. La simple manifestación de su condición de compañera permanente no es suficiente, pues la carga de la prueba le corresponde a la parte demandante, quien no ha aportado elementos probatorios idóneos que acrediten dicha relación. De igual forma, es inviable el reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por la parte demandante, por cuanto la tasación propuesta es exorbitante, y en tal sentido, en el improbable e hipotético caso que dicho concepto sea reconocido, no hay lugar al pago de suma alguna que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.

FRENTE A LA PRETENSIÓN No. “Daño a la vida en Relación”: **ME OPONGO** a esta pretensión por sustracción de materia, en tanto que resulta consecencial a la primera pretensión, y al ser improcedente, esta también debe ser desestimada frente al extremo pasivo. Sin perjuicio de ello, me opongo concretamente así:

- **Oposición al daño en la vida de relación a favor de LEOPOLDO ALONZO CORTEZ DEL VILLAR.** No hay lugar a reconocimiento alguno por concepto de daños morales en favor de LEOPOLDO ALONZO CORTEZ DEL VILLAR, dado que no existe responsabilidad en cabeza de la parte pasiva dentro del presente asunto. Además, como se sabe, para su reconocimiento deben encontrarse plenamente acreditados las causas o motivos que configuran dificultades emocionales del disfrute de las cosas, dificultades sociales o las barreras necesarias para acceder a el disfrute de la vida común que dificulten el transcurso de su diario vivir, así como el nexo causal entre la conducta desplegada por el agente y la materialización de este daño, cosa que no se logra demostrar en el caso de marras.

FRENTE A LA PRETENSIÓN No. “2. PERJUICIOS MATERIALES”: **ME OPONGO** a esta pretensión por sustracción de materia, en tanto que resulta consecencial a la primera pretensión, y al ser improcedente, esta también debe ser desestimada frente al extremo pasivo.

FRENTE A LA PRETENSIÓN No. “2.1. LUCRO CESANTE”: **ME OPONGO** a esta pretensión por sustracción de materia, en tanto que resulta consecencial a la primera pretensión, y al ser improcedente, esta también debe ser desestimada frente al extremo pasivo.

- **ME OPONGO** ya que no es procedente reconocer el pago solicitado por la parte demandante a título de lucro cesante no consolidado o futuro, dado que este concepto, conforme a la jurisprudencia aplicable, requiere la demostración de una pérdida real y comprobable de ingresos como consecuencia directa del hecho dañoso. En el caso concreto, no se evidencia que el señor Leopoldo Alonzo Cortez devengara ingresos a la fecha del accidente. Luego, teniendo en cuenta que este concepto de acuerdo con lo que se ha establecido jurisprudencialmente no puede ser reconocido a partir de puras conjeturas o especulaciones, sino que debe tener el carácter de cierto y comprobable, no es procedente. Además, la pretensión formulada carece de soporte técnico que permita

calcular dicho perjuicio conforme a las fórmulas actuariales reconocidas en sede judicial, resultando por ende inadmisibile.

- **La pérdida de capacidad laboral con la cual se está liquidando el lucro cesante, no obedece al evento ocurrido el 14 de abril de 2023, sino a una enfermedad degenerativa del demandante:**

El despacho deberá tener en cuenta que el cálculo por medio del cual se está liquidando el lucro cesante es errado, ello, teniendo en cuenta que para calcular el mismo se toma como base el Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral expedido por la Junta Nacional de Calificación para la calenda del 03 de septiembre de 2024. Ello, si se tiene en cuenta que la demandante a dicha fecha, no se había alcanzado un nivel de mejoría máxima como indica el manual único de calificación. Además, se dejaron de evaluar aspectos que si fueron evaluados por la Junta Regional de Calificación del meta como lo es la *presencia de enfermedades degenerativas de columna las cuales no están relacionadas con evento traumático agudo*. Tal y como se evidencia a continuación:

La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, fundamenta su dictamen, especialmente, en los siguientes términos: (...) "...Radica GYG ASESORES CONSULTORES ABOGADOS, solicitud de calificación de PCL para efectos de reclamación póliza soat por accidente de tránsito como Peatón, hechos ocurridos el 14-04-2023, posterior a lo cual presento: 1. trauma de tejidos blandos de columna. URGENCIA de fecha 14-04-2023: "...Paciente masculino de 30 años asiste en ambulancia, sufrió accidente de tránsito en calidad de peatón colisionado por vehículo particular, ingresa consciente, refiere dorsalgia y dolor en extremidad inferior derecha con limitación funcional, niega otro síntoma. Examen físico: con dolor en creta iliaca derecha, región lumbar y extremidad inferior derecha con limitación funcional, sensibilidad conservada en las 4 extremidades. Se indica manejo médico y tomografía de columna lumbosacra, radiografía de pelvis y fémur izquierdo, revalorar. Revaloración: Ecografía de abdomen total sin alteraciones demostrables. Radiografía de columna lumbar no evidencio alteraciones. Radiografía de pelvis no evidencio trazos de fractura. Radiografía de fémur no evidencio trazo de fractura. Se ordena tomar tomografía de columna lumbar por dolor el cual está pendiente, refiere persistencia del dolor aunque no hay limitación para el movimiento de las extremidades inferiores, por lo anterior de deja en observación. Paciente con reporte de tomografía de columna lumbosacra sin lesión o fractura, uroanálisis sin lesiones. Salida diclofenaco 75mg im

Entidad calificador: Junta Nacional de Calificación de Invalidez - Sala 2

Calificado: LEOPOLDO ALONZO CORTEZ DEL VILLAR

Dictamen: JN202420973

Página 2 de 12

dosis única, control en 3 días cita prioritaria...". CONSIDERACIONES DE LA JUNTA: En las imágenes diagnosticas realizadas se evidencia la presencia de enfermedades degenerativas de columna las cuales no están relacionadas con evento traumático agudo, por tanto la calificación de PCL ES 0%. El Médico ponente de la sala única de la junta regional del Meta procede a dar lectura al proyecto de ponencia y en consecuencia se procede a emitir el dictamen con el cual se califica la pérdida de capacidad laboral con base en Decreto 1507 del 2014. La votación en este caso es unánime y favorable a la ponencia de dictamen por parte de los tres Integrantes, quienes califican de la siguiente manera: TOTAL DEFICIENCIAS: 0.0%. ROL LABORAL / OCUPACIONAL: 0.0%. TOTAL PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL: 0.0%. ORIGEN: ACCIDENTE COMÚN. FECHA DE ESTRUCTURACIÓN: N/A..."

Documento: *Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral – Consideraciones de la La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta.*

Énfasis del documento: *CONSIDERACIONES DE LA JUNTA: En las imágenes diagnosticas realizadas se evidencia la presencia de enfermedades degenerativas de columna las cuales no están relacionadas con evento traumático agudo, por tanto, la calificación de PCL ES 0%*

En conclusión, es claro que la Corte Suprema de Justicia ha establecido jurisprudencialmente que no es dable presumir el lucro cesante, sino que este concepto debe probarse dentro del proceso, carga que le asiste únicamente al reclamante. De manera que en el caso de marras no puede existir reconocimiento de lucro cesante, en tanto no se arrió prueba siquiera sumaria de que el demandante dejara de decir algún ingreso. Además, no puede calcularse a partir de lo dispuesto en el Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral, en tanto el mismo, fue expedido teniendo en cuenta deficiencias que nada tienen que ver con el caso de marras.

FRENTE A LA PRETENSION “CUARTO”: **ME OPONGO** a la prosperidad de que el monto de los perjuicios sea debidamente actualizado a la fecha de la Sentencia y los intereses solicitados, en tanto que esta pretensión resulta consecencial a la pretensión principal y al ser aquella improcedente, esta también debe ser desestimada.

FRENTE A LA PRETENSION “QUINTO”: Por ser una solicitud dirigida al Despacho de un trámite administrativo que dé lugar a la expedición de copias no hay lugar a manifestarnos respecto de la presente pretensión.

FRENTE A LA PRETENSION “SEXTO”: En efecto, **ME OPONGO** a esta pretensión por cuanto es claro que no procede pago alguno por cuenta de mi representada, y en este sentido, por sustracción de materia, también es evidente que no debe cancelar ningún rubro por concepto de costas y agencias en derecho. Por las razones antes expuestas, solicito respetuosamente negar la totalidad de las pretensiones de la parte Accionante, y en su lugar, imponerle condena en costas y agencias en derecho.

OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

Objeto el juramento estimatorio presentado por el Demandante de conformidad con el artículo 206 del Código General del Proceso. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la objeción no se hará alusión a los perjuicios inmateriales toda vez que el mismo estipula expresamente que *“El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales.”* En virtud del precitado, en esta objeción no se hará alusión a los mismos.

En cuanto a la categoría de daños patrimoniales o materiales, específicamente el lucro cesante. Objeto su cuantía en atención a las siguientes circunstancias a saber:

No resulta procedente lo solicitado respecto del reconocimiento y pago en favor de la Demandante **LEOPOLDO ALONZO CORTEZ DEL VILLAR** de sumas de dinero por concepto de lucro cesante consolidado y futuro; lo anterior, en tanto que a la fecha no se ha acreditado la actividad productiva que desarrollaba y los ingresos percibidos este, de tal manera que no se cumple con los criterios exigidos para dicha reclamación, en la medida que el lucro cesante deber ser *“cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. (...) Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afina en una situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente (...)”*⁵. Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y, de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente, sin que ninguna de estas premisas se cumpla en este evento.

- **La pérdida de capacidad laboral con la cual se está liquidando el lucro cesante, no obedece al evento ocurrido el 14 de abril de 2023, sino a una enfermedad degenerativa del demandante:**

El despacho deberá tener en cuenta que el cálculo por medio del cual se está liquidando el lucro cesante es errado, ello, teniendo en cuenta que para calcular el mismo se toma como base el Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral expedido por la Junta Nacional de Calificación para la calenda del 03 de septiembre de 2024. Ello, si se tiene en cuenta que la demandante a dicha fecha, no se había alcanzado un nivel de mejoría máxima como indica el manual único de calificación. Además, se dejaron de evaluar aspectos que si fueron evaluados por la Junta Regional de Calificación del meta como lo es la *presencia de enfermedades degenerativas de columna las cuales no están relacionadas con evento traumático agudo*. Tal y como se evidencia a continuación:

La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, fundamenta su dictamen, especialmente, en los siguientes términos: (...) "...Radica GYG ASESORES CONSULTORES ABOGADOS, solicitud de calificación de PCL para efectos de reclamación póliza soat por accidente de tránsito como Peatón, hechos ocurridos el 14-04-2023, posterior a lo cual presento: 1. trauma de tejidos blandos de columna. URGENCIA de fecha 14-04-2023: "...Paciente masculino de 30 años asiste en ambulancia, sufrió accidente de tránsito en calidad de peatón colisionado por vehículo particular, ingresa consciente, refiere dorsalgia y dolor en extremidad inferior derecha con limitación funcional, niega otro síntoma. Examen físico: con dolor en creta iliaca derecha, región lumbar y extremidad inferior derecha con limitación funcional, sensibilidad conservada en las 4 extremidades. Se indica manejo médico y tomografía de columna lumbosacra, radiografía de pelvis y fémur izquierdo, revalorar. Revaloración: Ecografía de abdomen total sin alteraciones demostrables. Radiografía de columna lumbar no evidencio alteraciones. Radiografía de pelvis no evidencio trazos de fractura. Radiografía de fémur no evidencio trazo de fractura. Se ordena tomar tomografía de columna lumbar por dolor el cual está pendiente, refiere persistencia del dolor aunque no hay limitación para el movimiento de las extremidades inferiores, por lo anterior de deja en observación. Paciente con reporte de tomografía de columna lumbosacra sin lesión o fractura, uroanálisis sin lesiones. Salida diclofenaco 75mg im

Entidad calificador: Junta Nacional de Calificación de Invalidez - Sala 2

Calificado: LEOPOLDO ALONZO CORTEZ DEL VILLAR

Dictamen: JN202420973

Página 2 de 12

dosis única, control en 3 días cita prioritaria...". CONSIDERACIONES DE LA JUNTA: En las imágenes diagnosticas realizadas se evidencia la presencia de enfermedades degenerativas de columna las cuales no están relacionadas con evento traumático agudo, por tanto la calificación de PCL ES 0%. El Médico ponente de la sala única de la junta regional del Meta procede a dar lectura al proyecto de ponencia y en consecuencia se procede a emitir el dictamen con el cual se califica la pérdida de capacidad laboral con base en Decreto 1507 del 2014. La votación en este caso es unánime y favorable a la ponencia de dictamen por parte de los tres Integrantes, quienes califican de la siguiente manera: TOTAL DEFICIENCIAS: 0.0%. ROL LABORAL / OCUPACIONAL: 0.0%. TOTAL PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL: 0.0%. ORIGEN: ACCIDENTE COMÚN. FECHA DE ESTRUCTURACIÓN: N/A..."

Documento: *Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral – Consideraciones de la La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta.*

Énfasis del documento: *CONSIDERACIONES DE LA JUNTA: En las imágenes diagnosticas realizadas se evidencia la presencia de enfermedades degenerativas de columna las cuales no están relacionadas con evento traumático agudo, por tanto, la calificación de PCL ES 0%*

En conclusión, es claro que la Corte Suprema de Justicia ha establecido jurisprudencialmente que no es dable presumir el lucro cesante, sino que este concepto debe probarse dentro del proceso, carga que le asiste únicamente al reclamante. De manera que en el caso de marras no puede existir reconocimiento de lucro cesante, en tanto no se arrió prueba siquiera sumaria de que el demandante dejara de decir algún ingreso. Además, no puede calcularse a partir de lo dispuesto en el Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral, en tanto el mismo, fue expedido teniendo en cuenta deficiencias que nada tienen que ver con el caso de marras.

Por las razones antes expuestas, me opongo enfáticamente al juramento estimatorio de la demanda.

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA

1. FALTA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA POR PARTE DE LA SEÑORA MAYRA LISSETT RODRIGUEZ UZCATEGUI.

En el presente proceso se vislumbra la falta de legitimación en la causa por activa respecto de la señora Mayra Lissett Rodríguez Uzcategui quien aduce ser la compañera permanente del señor Leopoldo Alonzo Cortez Del Villar. Lo anterior, toda vez que no acreditó a través de los medios legalmente establecidos la relación de parentesco que tenía con el señor Cortez del Villar y en la cual sustenta sus perjuicios. Razón por la cual, no es jurídicamente procedente declarar indemnización alguna a su cargo, por los hechos de este litigio.

La legitimación en la causa ha sido definida ampliamente por la jurisprudencia, como aquella titularidad de los derechos de acción y contradicción. El Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 19753, Magistrado Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, ha señalado sobre esta categoría jurídica lo siguiente:

*“(...) La legitimación en la causa por activa hace referencia a la relación sustancial que debe existir entre las partes del proceso y el interés sustancial del litigio, **de tal manera que aquella persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es a quien habilita la ley para actuar procesalmente.***

Según lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación, la falta de legitimación en la causa no constituye una excepción que pueda enervar las pretensiones de

la demanda, sino que configura un presupuesto anterior y necesario para que se pueda proferir sentencia, en el entendido de que, si no se encuentra demostrada tal legitimación, el juez no podrá acceder a las pretensiones de la demanda. Si bien, la falta de legitimación en la causa se constituye en un presupuesto necesario para proferir sentencia, ello no es óbice para que esa circunstancia alegada a manera de excepción pueda ser resuelta en esta oportunidad procesal, toda vez que según los dictados del numeral 6 del Art. 180 del CPACA., en el curso de la audiencia inicial, el juez debe resolver acerca de las excepciones previas y sobre las de falta de legitimación en la causa, cosa juzgada, transacción, conciliación y prescripción extintiva (...)"¹ (Subrayado y negrilla fuera del texto).

Del análisis jurisprudencial señalado y su contraste con el caso que nos ocupa, se extrae que la señora Mayra Lissett Rodríguez Uzcategui no está legitimada en la causa por activa para actuar en el presente proceso, toda vez que no acreditó la relación por la cual comparece a este proceso con pretensión indemnizatoria, puesto que alega que es la compañera permanente del señor Cortez del Villar. Sin embargo, no obra en el expediente ninguna prueba o elemento de juicio suficiente para probar tal circunstancia, sin perder de vista que la Ley 54 de 1990 modificada por la Ley 979 de 2005, establece cuales son las pruebas o elementos de juicio para demostrar la existencia de una unión marital de hecho entre compañeros permanentes:

"(...) Art. 4o. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos:

1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes.

¹ Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 19753, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido.

3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera Instancia (...)"

Frente a tales criterios forzosos establecidos jurisprudencialmente, se encuentra que ninguno de los dos se acredita en el presente proceso, dado que no existe prueba alguna que dé cuenta de esa relación de compañeros permanente alegada por el Demandante. Bajo el entendido de que no puede el Demandante alegar como prueba su propio dicho, es a todas luces evidente que el cobro de algún tipo de perjuicios por las lesiones del señor Leopoldo Cortez del Villar, resulta improcedente frente a la señora Mayra Lissett Rodríguez Uzcategui.

En conclusión, al no encontrarse acreditado prueba alguna o elemento de juicio suficiente para acreditar la relación filial y/o afectiva entre el señor Cortéz y la señora Mayra Lissett Rodríguez Uzcategui, se encuentra que ésta última no está legitimada para solicitar tales indemnizaciones, y en consecuencia, resulta clara la improcedencia del reconocimiento de las mismas. En el plenario no se evidencia que se aporte una escritura pública, un acta de conciliación o una sentencia judicial en la que pueda entenderse probada la existencia de unión marital de hecho entre compañeros permanentes. Razón por la cual, solicito al Despacho tener como probada esta excepción frente a la ausencia de legitimación de la señora Mayra Lissett Rodríguez Uzcategui para solicitar cualquier tipo de reconocimiento por eventuales perjuicios en este proceso.

2. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE LUHANNA ISABELLA FERNANDEZ SAEZ Y MARYINI KIRIMER FERNANDEZ RODRIGUEZ - NO ACREDITAN LA CALIDAD DE HIJAS DE CRIANZA

Su Despacho no podrá acoger lo manifestado por la parte demandante respecto a la supuesta relación de Luhanna Isabella Fernández Saez y Maryini Kirimer Fernández Rodríguez como hijas de crianza del señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, toda vez que dicha calidad no ha sido acreditada mediante prueba idónea y suficiente dentro del proceso. La falta de sustentación probatoria impide otorgarle efectos jurídicos a esta afirmación, por lo que cualquier valoración basada en dicha presunción carecería de sustento fáctico y legal. En consecuencia, la pretensión de la parte demandante de configurar un vínculo filial inexistente podría inducir a un error en la apreciación judicial, alterando la verdadera naturaleza de la relación entre las demandantes y el señor Cortez del Villar.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes requisitos para demostrar la existencia de un vínculo de crianza:

(a) Para calificar a un menor como hijo de crianza es necesario demostrar la estrecha relación familiar con los presuntos padres de crianza y una deteriorada o ausente relación de lazos familiares con los padres biológicos. El primero de los elementos supone la existencia real, efectiva y permanente de una convivencia que implique vínculos de afecto, solidaridad, ayuda y comunicación. El segundo de los elementos supone una desvinculación con el padre o madre biológicos según el caso, que evidencie una fractura de los vínculos afectivos y económicos. Ello se puede constatar en aquellos casos en los cuales existe un desinterés por parte de los padres para fortalecer sus lazos paterno-filiales y por proveer económicamente lo suficiente para suplir las necesidades básicas de sus hijos

Posición coadyuvada por la Corte Suprema de Justicia de la siguiente manera:

En suma, para que opere la presunción en comento, deben acreditarse tres (3) requisitos: el trato, la fama y el tiempo. Valga la pena explicarlo, el padre o la

madre debe haber, no sólo abrigado al hijo en su familia, sino proveer moral y económicamente por su subsistencia, educación y establecimiento, debiendo trascender el ámbito privado al público, tanto que sus deudos, amigos o el vecindario en general, le hayan reputado como hijo de ese padre en virtud de aquel tratamiento; y extenderse por mínimo cinco (5) años²

Ante la claridad de los requisitos establecidos de manera jurisprudencial, es de señalar que en el caso de marras no se logra apreciar la existencia de ninguno de ellos, por cuanto se desconoce si el señor Leopoldo Cortez ha proporcionado apoyo económico a Luhanna Isabella Fernández Saez y Maryini Kirimer Fernández Rodríguez, como tampoco se logra acreditar la fama o reconocimiento de dicha relación como una paterno-filial, y menos se ha demostrado haberse mantenido dicho estatus por el término mínimo de cinco años. Por lo mismo, ante la falta de acreditación de la condición en la que se presenta Luhanna Isabella Fernández Saez y Maryini Kirimer Fernández Rodríguez, el despacho no podrá tenerla por legitimada por activa para reclamar indemnización alguna.

Cabe resaltar que la menor Luhanna Isabella Fernández Saez no es hija del señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, ni tampoco de Mayra Lissett Rodríguez Uzcátegui, quien se pretende hacer valer como su compañera permanente. Según el acta de nacimiento que obra en el expediente, los padres biológicos de Luhanna Isabella son personas totalmente ajenas a la víctima, incluso, es hija de la señora “Ángela Gisbel Saez Gutierrez”, ajena en todo caso al presente asunto, por lo que no existe ningún vínculo de consanguinidad ni relación jurídica que permita presumir dicha relación.

En conclusión, en el presente caso no se puede considerar la presunta relación de Luhanna Isabella Fernández Saez y Maryini Kirimer Fernández Rodríguez como hijas de crianza del señor Leopoldo Cortez, ya que no se ha acreditado esta calidad, tal como establece la jurisprudencia al indicar que

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC1171-2022. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

para demostrar dicho vínculo se requiere evidenciar una relación estrecha y permanente mediante los requisitos de trato, fama y tiempo, con un mínimo de cinco años. Ante la falta de acreditación del apoyo económico a favor de Luhanna Isabella Fernández Saez y Maryini Kirimer Fernández Rodríguez, ni que la relación sea reconocida públicamente como paterno-filial, ni que haya durado al menos cinco años, Luhanna Isabella Fernández Saez y Maryini Kirimer Fernández Rodríguez no tienen legitimación en la causa por activa.

3. EXIMENTE DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS DEMANDANDAS POR CONFIGURARSE LA CAUSAL “HECHO DE UN TERCERO” – ATRIBUIBLE A QUIEN ESTACIONÓ DE FORMA INDEBIDA EL VEÍCULO (OBJETO DE RETIRO DE MERCANCÍA POR PARTE DE LA VÍCTIMA) EN LA CENTRAL DE ABASTOS.

En el presente caso no podrá imputarse responsabilidad alguna a los demandados, como quiera que en el presente caso operó la causal excluyente de la responsabilidad denominada “hecho de un tercero”. Lo anterior se fundamenta en la conducta **imprudente e irregular** de quien estacionó indebidamente el vehículo en la Central de Abastos de Villavicencio, precisamente en la zona donde el demandante, Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, procedía a retirar mercancía. Dicho actuar creó una situación de riesgo que interfirió en el desarrollo normal del tránsito y contribuyó de manera determinante a la ocurrencia del accidente de tránsito. Situación que impide la imputación y hace improcedente la declaratoria de responsabilidad contra nuestro asegurado.

Dicho esto, es importante anotar que el hecho de un tercero hace parte de las causas extrañas mediante las cuales se rompe el vínculo de causalidad entre los daños causados y las conductas de a quien hoy se le imputa el daño. De modo tal que la conducta del tercero, que sea imprevisible e irresistible y que desempeñe un papel exclusivo o esencial en el cumplimiento de los débitos del oferente, reviste la calidad de excusar su responsabilidad. Frente a lo anterior y antes de entrar a estudiar la aplicación de la causal de exclusión de responsabilidad al caso concreto, es necesario hacer referencia a la señalada norma del artículo 64 del Código Civil y posteriormente, hacer un

recorrido por los pronunciamientos jurisprudenciales más relevantes con los cuales se le ha dado desarrollo a la figura del hecho de tercero, como causal que enerva la responsabilidad.

*“Artículo 64. Fuerza mayor o caso fortuito: Se llama fuerza mayor o caso fortuito el **imprevisto o que no es posible resistir**, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 21 de noviembre de 2008, fue enfática al señalar que:

“(…) cuando un contratante pretende alegar el hecho de un tercero como factor exonerante de responsabilidad deberá probar que tal hecho fue imprevisible e irresistible”⁶

Al respecto, es necesario complementar con lo señalado por la Jurisprudencia del Consejo de Estado⁷, quien se ha pronunciado sobre el hecho del tercero, así:

*“Por otra parte, en relación con la causal de exoneración consistente en el hecho de un tercero, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la misma **se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado de manera alguna con la actuación de aquel**” (Subrayado y negrilla por fuera del texto original)*

Así también, en pronunciamiento más reciente, señaló el más alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo⁸ que:

“Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima) constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado.

(...)

Por otra parte, a efectos de que operen las mencionadas eximentes de responsabilidad (hecho de la víctima o de un tercero), es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquellos tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que dichas causales eximentes de responsabilidad puedan tener plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima o por un tercero sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada o determinante, (...) (Subrayado y negrilla por fuera del texto original)

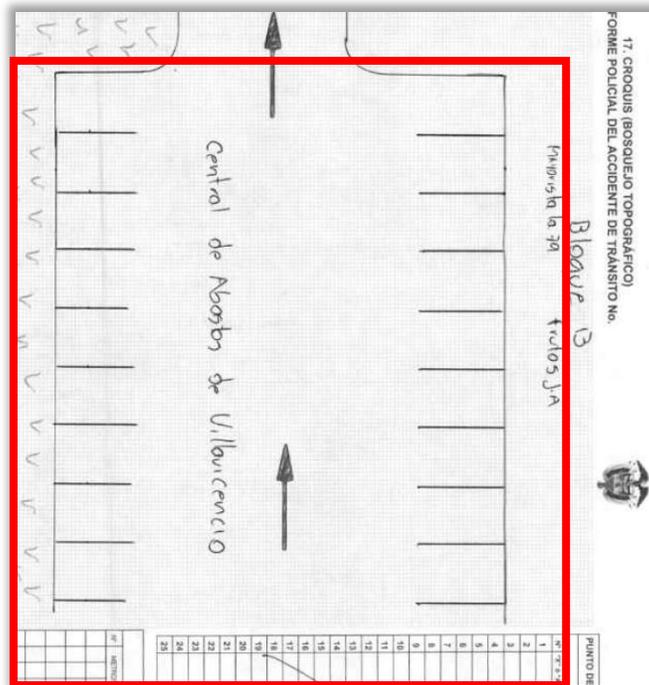
Por su parte, la doctrina al respecto de hecho del tercero señala que:

“Esta causa de exoneración parte del supuesto inicial, según el cual, el causante directo del daño es un tercero ajeno a las partes intervinientes en el juicio de

responsabilidad (...) jurídicamente solo es tercero alguien extraño, por quien no se debe responder, es decir, no vinculado con el sujeto contra el que se dirige la acción resarcitoria”⁹

En concordancia con lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia, es claro que, si el daño alegado se produjo como consecuencia de un hecho exclusivo de un tercero, el presunto responsable será exonerado de cualquier tipo de responsabilidad. En el caso concreto, es claro que la imprudente y consciente omisión a las señales y normas de tránsito de parte quien estacionó indebidamente el vehículo en la Central de Abastos de Villavicencio, precisamente en la zona donde el demandante, Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, procedía a retirar mercancía, fue un factor relevante e indispensable para la ocurrencia del accidente de tránsito del 14 de abril de 2023. Por tanto, es jurídicamente inviable imputarle responsabilidad al extremo pasivo, y en ese sentido deberá este Despacho negar las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, es preciso señalar que, con base en el extracto del material fotográfico allegado con la demanda, resulta claro que quien estacionó indebidamente el vehículo en la Central de Abastos de Villavicencio, precisamente en la zona donde el demandante, Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, procedía a retirar mercancía, constituye un factor determinante en la ocurrencia del accidente. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que, si bien el agente de tránsito Jonathan Steven Giraldo, identificado con C.C. 86086126 y placas 161-209, no presenció directamente la ocurrencia del accidente, sí elaboró el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) No. A00-1562760, en el cual representó gráficamente lo que pudo observar del tramo vial interno de la Central de Abastos de Villavicencio así:



La representación gráfica del informe evidencia la existencia de espacios de estacionamiento plenamente demarcados e identificados en la Central de Abastos de Villavicencio. Sin embargo, el vehículo indebidamente estacionado en la zona donde el demandante, Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, procedía a retirar mercancía no se encontraba en dichas áreas habilitadas para el parqueo, sino que fue dejado en un sector destinado para la circulación vehicular. Esto significa que dicho vehículo se encontraba estacionado de manera irregular, obstruyendo el flujo normal del tránsito y generando un riesgo adicional para quienes se desplazaban por la vía, lo que constituye un factor determinante en la ocurrencia del accidente. Tal y como se muestra a continuación:



Imagen: Video en donde se aprecia el vehículo mal estacionado extraído del expediente digital.

Ello indica, como se dijo, la existencia vehículo es estacionado en un lugar no autorizado o indebido, especialmente en una zona con tránsito constante de vehículos, se afecta la visibilidad de los conductores y peatones, creando puntos ciegos que pueden impedir la adecuada reacción frente a situaciones de riesgo. En este caso, la presencia del vehículo estacionado en la Central de Abastos de Villavicencio impidió que los demás actores viales tuvieran un campo de visión adecuado, lo que pudo haber contribuido directamente al siniestro.

Adicionalmente no cabe duda de que aquella contravino las normas del Código Nacional de Tránsito, por la omisión de los siguientes deberes y obligaciones contenidas en la Ley 769 de 2002, así:

ARTÍCULO 55. COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor,

pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.

(...)

Artículo 76. Lugares prohibidos para estacionar

Está prohibido estacionar vehículos en los siguientes lugares:

- 1. Sobre andenes, zonas verdes o zonas de espacio público destinado para peatones, recreación o conservación.*
- 2. En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un cruce.*
- 3. En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición o la restricción en relación con horarios o tipos de vehículos.*
- 4. En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de los accesos a estos.*
- 5. En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de servicio público, o para limitados físicos.*
- 6. En carriles dedicados a transporte masivo sin autorización.**
- 7. En ciclorrutas o carriles dedicados o con prioridad al tránsito de bicicletas.*

8. A una distancia mayor de treinta (30) centímetros de la acera.

9. *En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes o accesos para personas con discapacidad.*

10. *En curvas.*

11. *Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados.*

12. *Donde las autoridades de tránsito lo prohíban.*

13. *En zona de seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía principal, vías secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades férreas.*

En consonancia con lo reseñado y de acuerdo con el análisis de causalidad existente en el presente caso, se puede inferir que el hecho que debe ser considerado como causa adecuada y determinante del daño estuvo en cabeza de quien estacionó indebidamente el vehículo en la Central de Abastos de Villavicencio, precisamente en la zona donde el demandante, Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, procedía a retirar mercancía, quien como se ha indicado, en desconocimiento de las normas de tránsito, de manera descuidada e irresponsable, estacionó de forma indebida el vehículo en un espacio destinado para el tránsito vehicular, lo que causó el accidente del 14 de abril de 2023.

Claramente no existe fundamento fáctico ni jurídico que obligue al extremo pasivo en el presente proceso a indemnizar a la parte actora por los eventuales perjuicios producidos con ocasión al accidente de tránsito del 14 de abril de 2023. Lo anterior, por cuanto como ya quedó plenamente demostrado, fue la falta de cuidado y la negligencia atribuible de manera exclusiva quien estacionó indebidamente el vehículo en la Central de Abastos de Villavicencio, precisamente en la zona donde

el demandante, Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, procedía a retirar mercancía la causa determinante en la producción del accidente. En tal virtud, no es jurídicamente factible imputar obligación indemnizatoria alguna al extremo pasivo de la litis.

En conclusión, no es jurídicamente viable imputar obligación indemnizatoria a cargo del extremo pasivo de la litis, puesto que los daños alegados por el extremo actor son consecuencia de un hecho exclusivo de un tercero de quien estacionó indebidamente el vehículo en la Central de Abastos de Villavicencio, precisamente en la zona donde el demandante, Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, procedía a retirar mercancía. Esto, fue un factor determinante en la ocurrencia del accidente, pues alteró la dinámica normal de la vía, redujo la visibilidad y generó un riesgo innecesario para peatones y conductores. Dado que el informe policial evidencia la existencia de espacios de estacionamiento claramente demarcados, resulta evidente que quien dejó su vehículo en un área no autorizada incurrió en una conducta imprudente, contribuyendo significativamente al siniestro. De esa manera, dado que la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en indicar que el hecho de un tercero impide que se declare la existencia de responsabilidad extracontractual, es claro que en el caso concreto deben negarse todas las pretensiones de la demanda. En ese sentido, solicito al señor Juez, declarar probada esta excepción.

4. EXIMENTE DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDANDOS POR CONFIGURARSE LA CAUSAL “HECHO EXCLUSIVO DE LA VICTIMA”.

Ahora bien, es necesario indicar que no podrá imputarse responsabilidad alguna a las demandadas como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el 14 de abril de 2023, comoquiera que operó la causal excluyente de la responsabilidad denominada “hecho exclusivo de la víctima”. Lo anterior, Como se ha analizado en precedencia, el señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar incurrió en una conducta imprudente al situarse en una zona no destinada para la permanencia de peatones ni para la carga y descarga de mercancía, exponiéndose innecesariamente al tránsito de vehículos. De los elementos de prueba, incluyendo la inspección del lugar y la demarcación vial en la Central de

Abastos de Villavicencio, se desprende que el sitio donde ocurrió el incidente no es un espacio habilitado para la permanencia de personas, sino un tramo de circulación vehicular..

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha indicado con claridad que cuando la conducta imprudente de la víctima fue suficiente para causar el daño, debe liberarse de toda responsabilidad a los demandados, así:

“La culpa exclusiva de la víctima, como factor eximente de responsabilidad civil, ha sido entendida como la conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, que por sí sola resultó suficiente para causar el daño. Tal proceder u omisión exime de responsabilidad si se constituye en la única causa generadora del perjuicio sufrido, pues de lo contrario solo autoriza una reducción de la indemnización, en la forma y términos previstos en el artículo 2357 del Código Civil.”³

(...)

Precisado lo anterior, se debe mencionar que la doctrina es pacífica en señalar que para el comportamiento del perjudicado tenga influencia en la determinación de la obligación reparatoria, es indispensable que tal conducta incida causalmente en la producción del daño y que dicho comportamiento no sea imputable al propio demandado en cuanto que él ya haya provocado esa reacción en la víctima. Sobre lo que existe un mayor debate doctrinal es si se requiere que la conducta del perjudicado sea constitutiva de culpa, en sentido estricto, o si lo que se exige es el simple aporte causal de su actuación independientemente de que se pueda realizar un juicio de reproche sobre ella.

³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC7534-2015. Sentencia del 16 de junio de 2015.

(...) En todo caso, así se utilice la expresión “culpa de la víctima” para designar el fenómeno en cuestión, en el análisis que al respecto se realice no se deben utilizar, de manera absoluta o indiscriminada, los criterios correspondientes al concepto técnico de culpa, entendida como presupuesto de la responsabilidad civil en la que el factor de imputación es de carácter subjetivo, en la medida en que dicho elemento implica la infracción de deberes de prudencia y diligencia asumidos en una relación de alteridad, esto es, para con otra u otras personas, lo que no se presenta cuando lo que ocurre es que el sujeto damnificado ha obrado en contra de su propio interés. Esta reflexión ha conducido a considerar, en acercamiento de las dos posturas, que **la “culpa de la víctima” corresponda – más precisamente – a un conjunto heterogéneo de supuestos de hecho, en los que se incluyen no solo comportamientos culposos en sentido estricto, sino también actuaciones anómalas o irregulares del perjudicado que interfieren causalmente en la producción del daño**, con lo que se logra explicar, de manera general, que la norma consagrada en el artículo 2357 del código Civil, aún cuando allí se aluda a “imprudencia” de la víctima, pueda ser aplicable a la conducta de aquellos llamados inimputables porque no son “capaces de cometer delito o culpa” o a comportamientos de los que la propia víctima no es consciente o en los que no hay posibilidad de hacer reproche alguno a su actuación (v.gr. aquel que sufre un desmayo, un desvanecimiento o un tropiezo y como consecuencia sufre un daño)

Así lo consideró esta Corporación hace varios lustros cuando precisó que “en la estimación que el juez ha de hacer del alcance y forma en que el hecho de la parte lesionada puede afectar el ejercicio de la acción civil de reparación, no hay para que tener en cuenta, a juicio de la Corte, el fenómeno de la imputabilidad moral para calificar como culpa la imprudencia de la víctima, **porque no se trata entonces del hecho- fuente de la responsabilidad extracontractual que**

exigiría la aplicación de un criterio subjetivo, sino del hecho de la imprudencia simplemente, objetivamente considerado como un elemento extraño a la actividad del autor pero concurrente en el hecho y destinado solamente a producir una consecuencia jurídica patrimonial en relación con otra persona.⁴ - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

Por todo lo anterior, la doctrina y jurisprudencia contemporánea⁵ prefieren denominar el fenómeno en cuestión como el “hecho” de la víctima, como causa única en la producción del daño cuya reparación se demanda. Continuando con el estudio jurisprudencial del hecho de la víctima como causal eximente de la responsabilidad, debemos hacer referencia a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que en fallo del 17 de noviembre de 2020 se refirió a los elementos que estructuran la responsabilidad así:

*“El régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas es singular y está sujeto a directrices específicas en su etiología, ratio y fundamento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y, el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, **la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina***

⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de marzo de 1941.

⁵ Corte suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 2010. Expediente 1989- 00042 M.P. Arturo Solarte Rodríguez

que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor.⁶ - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

En el mismo pronunciamiento del 17 de noviembre de 2020, la corte indicó:

*“La visión del asunto contenida en dicha providencia se traduce en una verdad inobjetable: si no existe nexo causal entre el daño y el actuar del demandado, resulta indudable que en ese evento no pudo mediar culpa o dolo de su parte, dado que, finalmente, **a nadie puede atribuirse falta alguna por un hecho que no tiene ninguna relación con su conducta**”⁷ - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)*

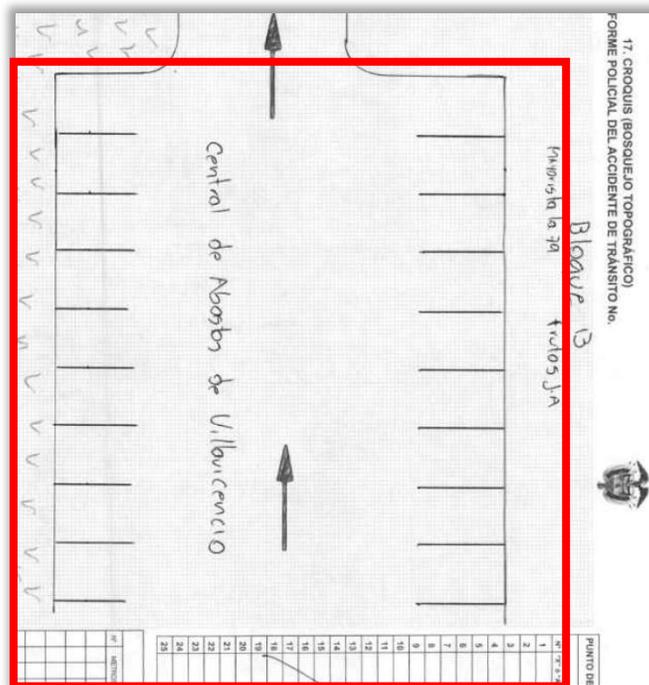
Teniendo en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales expuestos, es dable concluir que, de mediar un “hecho exclusivo de la víctima”, el presunto responsable y generador del daño será exonerado de cualquier tipo de responsabilidad. Para el caso que nos ocupa, es totalmente claro que la conducta del señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, al situarse en una zona no destinada para la permanencia de peatones ni para la carga y descarga de mercancía, exponiéndose innecesariamente al tránsito de vehículos, fue factor relevante y adecuado que incidió en accidente ocurrido el 14 de abril de 2023 en el que este resultó herido. Por tal razón, resulta jurídicamente inviable imputarle responsabilidad a las Demandadas.

Para dar luz sobre el asunto al Despacho es necesario traer a colación la descripción de la vía, la descripción de daños y lugar de impacto de la motocicleta y el vehículo asegurado. Primero, es importante dejar claro IPAT solo es funcional para determinar las condiciones de la vía porque el vehículo fue movido de manera posterior al accidente y, por tanto, no era posible para el agente de tránsito determinar una hipótesis frente a la ocurrencia del accidente. Sin embargo y pese a ello, El

⁶ Corte Suprema de Justicia. SC4420-2020. Expediente 2011-00093. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

⁷ Ibidem.

Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) no asigna una codificación específica a ninguno de los involucrados, sino que se limita a consignar la información de manera general. Por lo tanto, no es cierto que del IPAT pueda inferirse con certeza lo que sostiene la parte demandante, ya que el documento no determina de manera individualizada la responsabilidad de cada interviniente en el siniestro. Precisamente en la zona donde el demandante, Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, procedía a retirar mercancía, constituye un factor determinante en la ocurrencia del accidente. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que, si bien el agente de tránsito Jonathan Steven Giraldo, identificado con C.C. 86086126 y placas 161-209, no presenció directamente la ocurrencia del accidente, sí elaboró el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) No. A00-1562760, en el cual representó gráficamente lo que pudo observar del tramo vial interno de la Central de Abastos de Villavicencio así:



La representación gráfica del informe evidencia la existencia de espacios de estacionamiento plenamente demarcados e identificados en la Central de Abastos de Villavicencio. Sin embargo, el demandante, Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, pese a su conocimiento del asunto, procedió situarse en una zona no destinada para la permanencia de peatones ni para la carga y descarga de mercancía, exponiéndose innecesariamente al tránsito de vehículos. Esto significa que el demandante incurrió en una conducta imprudente. Tal y como se muestra a continuación:



Imagen: Video en donde se aprecia el vehículo mal estacionado extraído del expediente digital.

Por lo tanto, al determinarse la responsabilidad que obra en cabeza del señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar operó la causal exonératela de responsabilidad denominada “hecho de exclusivo de la víctima”, en tanto fue quien se expuso imprudentemente su vida al incurrir en una conducta imprudente al situarse en una zona no destinada para la permanencia de peatones ni para la carga y descarga de mercancía, exponiéndose innecesariamente al tránsito de vehículos, asumiendo un

riesgo que a la postre se materializó en sus lesiones, pues fue este quien decidió situarse en una zona no destinada para la permanencia de peatones ni para la carga y descarga de mercancía, exponiéndose innecesariamente al tránsito de vehículos, se tiene que aumentó de manera desproporcionada el riesgo permitido. Lo que desde ya debe indicarle al Despacho una falta total de prudencia de la víctima, dado que el accidente habría podido evitarse si el señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, hubiese atendido a las normas de tránsito que regulan el comportamiento de los peatones en la vía. El Código Nacional de Tránsito en su artículo 58 dispone la prohibición a los peatones, entre otras cosas, de invadir zona destinada al tránsito de vehículos:

“Artículo 58. Prohibiciones a los peatones

Los peatones no podrán:

Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, ni transitar en ésta en patines, monopatines, patinetas o similares.

Llevar, sin las debidas precauciones, elementos que puedan obstaculizar o afectar el tránsito.

Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavías del ferrocarril.

Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido.

Remolcarse de vehículos en movimiento.

Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física.

Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos

peatonales.

Ocupar la zona de seguridad y protección de la vía férrea, la cual se establece a una distancia no menor de doce (12) metros a lado y lado del eje de la vía férrea.

Subirse o bajarse de los vehículos, estando éstos en movimiento, cualquiera que sea la operación o maniobra que estén realizando.

Transitar por los túneles, puentes y viaductos de las vías férreas.

PARÁGRAFO 1o. Además de las prohibiciones generales a los peatones, en relación con el STTMP, éstos no deben ocupar la zona de seguridad y corredores de tránsito de los vehículos del STTMP, fuera de los lugares expresamente autorizados y habilitados para ello.

PARÁGRAFO 2o. Los peatones que queden incurso en las anteriores prohibiciones se harán acreedores a una multa de un salario mínimo legal diario vigente, sin perjuicio de las demás acciones de carácter civil, penal y de policía que se deriven de su responsabilidad y conducta.

Dentro del perímetro urbano, el cruce debe hacerse sólo por las zonas autorizadas, como los puentes peatonales, los pasos peatonales y las bocacalles.”

Además de lo anterior, no puede perderse de vista la regulación de tránsito ateniende al comportamiento exigido peatón, la cual no es otra que la exigida en el artículo 55 del Código Nacional de Tránsito, que indica:

ARTÍCULO 55. COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.

De lo aquí expuesto, se colige que el señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar se encontraba incumpliendo las normas de tránsito, en tanto se encontraba invadiendo zona destinada al tránsito de vehículos, además, puso en riesgo su vida al situarse en una zona no destinada para la permanencia de peatones ni para la carga y descarga de mercancía, exponiéndose innecesariamente al tránsito de vehículos.

Bajo dicho derrotero, es evidente que el señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar realizó una conducta prohibida e imprudentemente, exponiendo su vida. Además, desatendiendo las leyes que regulan el tránsito en Colombia. Lo que no puede ser desconocido por el Despacho, puesto que desde la prueba base de este proceso queda totalmente claro que la causa que ocasionó el accidente en el que resultó lesionado fue de exclusiva responsabilidad éste y no del conductor del vehículo de placas LGK783. Por cuanto es evidente que las circunstancias que rodearon el hecho se encontraban en la esfera de dominio de la víctima y no de los demandados.

En conclusión, es totalmente claro que la conducta Leopoldo Alonzo fue el factor relevante y adecuado que incidió en la ocurrencia del accidente, en tanto de manera voluntaria, asumió un riesgo que a la postre se materializó en sus lesiones, pues irresponsablemente aumentó de manera desproporcionada el riesgo permitido, siendo que él mismo fue el generador de la situación de peligro para el bien jurídico de la vida e integridad personal, En tanto, el señor **Leopoldo Alonzo Cortez del Villar** incurrió en una conducta imprudente al situarse en una zona no destinada para la permanencia de peatones ni para la carga y descarga de mercancía, exponiéndose

innecesariamente al tránsito de vehículos.. Por lo que resulta jurídicamente inviable imputarles responsabilidad a las demandadas por estos hechos.

Por tanto, deberá el Honorable Juez proceder a negar las pretensiones de la demanda.

5. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR LA NO ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE AQUELLA – EL IPAT NO ES MEDIO DE PRUEBA FEHACIENTE DE RESPONSABILIDAD.

Se formula esta excepción por cuanto en el presente proceso es claro que el único medio probatorio con el cual la parte demandante pretende probar la responsabilidad civil del conductor del vehículo de placas LGK783 es el Informe Policial de Accidente de Tránsito, documento que no tiene virtualidad para endilgar responsabilidad civil puesto que, por un lado, el agente de tránsito que lo suscribió no fue testigo de los hechos, dado que se presenta en el lugar de manera posterior a la ocurrencia del evento (cerca de 1 hora después); y, por el otro, lo que se consigna en estos documentos corresponde a una mera hipótesis (que según la Real Academia Española es la “*suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia*”), así las cosas no hay prueba que con certeza respalde la tesis de la parte demandante, y por ende la consecuencia jurídica innegable es el fracaso de sus pretensiones.

Las pretensiones carecen de fundamento, especialmente porque no existe ningún tipo de obligación en cabeza de los demandados, ya que en la esfera de la responsabilidad civil implorada no se constituyen los elementos necesarios para que la misma sea predicada (daño, conducta reprochable desplegada por la parte pasiva y nexo de causalidad), pues en el caso que nos ocupa, de haberse presentado algún tipo de perjuicio, este se deriva de hechos en los que ninguna injerencia tuvo el demandado, razón por la cual hay que señalar que es inexistente nexo alguno de causalidad que permita edificar la responsabilidad civil extracontractual.

Igualmente, se debe señalar que en el Capítulo V de la Resolución 11268 de 2012, se indica de forma clara que, en todo caso, la hipótesis que indique el agente de tránsito NO IMPLICA RESPONSABILIDAD PARA LOS CONDUCTORES:

Recuerde que la hipótesis indicada no implica responsabilidades para los conductores, sino que expresan las acciones generadoras o intervinientes en la evolución física de un accidente, debidamente fundamentadas mediante la objetividad y el análisis técnico-científico de los elementos materiales de prueba y evidencia física encontrada en el lugar de los hechos.

El marco normativo y el manual de diligenciamiento del IPAT permiten establecer que el informe policial de accidente de tránsito no es un informe pericial, sino un informe descriptivo. Este informe, a su vez, tiene unos criterios de evaluación propios, que no son los establecidos por el CPG o el CPACA para este tipo de prueba. Esta evaluación implica, entre otras, que la ratificación del informe debe hacerse según el protocolo establecido en el manual, es decir, que las preguntas planteadas en el proceso deben estar orientadas a establecer si el agente se ciñó al protocolo. Asimismo, el hecho de que el manual del diligenciamiento entienda que el informe policial de accidente de tránsito puede hacer parte de un proceso, implica que aquel debe ser considerado como un material probatorio, el cual se revisa en conjunto con otras pruebas, pues se itera aquel no constituye prueba alguna de responsabilidad.

Es decir, el hecho de que la parte actora haya aportado este informe, no quiere decir que se encuentre probada la responsabilidad del conductor del vehículo de placa LGK783, toda vez que deberá ser valorado en conjunto con las demás pruebas que se aporten y se practiquen en la etapa probatoria del proceso. Así las cosas, la conclusión de las causas que dieron origen al accidente de tránsito, corresponde al fondo del presente litigio.

Por otra parte, es importante reseñar que el IPAT no tiene el carácter ni la aptitud legal para brindar conceptos técnicos ni realizar evaluaciones de responsabilidad, toda vez que estos informes tienen parámetros definidos en la ley que imponen un límite restrictivo sobre su contenido y las funciones del agente o policía como informante del suceso. Así pues, el artículo 149 de la ley 769 de 2002 establece el contenido del informe policial de la siguiente manera:

“(…) El informe contendrá por lo menos:

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.

Clase de vehículo, número de la placa y demás características.

Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.

Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.

Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos. Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.

Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.

Descripción de los daños y lesiones.

Relación de los medios de prueba aportados por las partes.

Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes. (negrita fuera del texto original).”

El artículo 146 de la referida ley contiene los parámetros de competencia y procedimiento que deben observarse a la hora de realizar conceptos técnicos acerca de la responsabilidad derivada de un accidente de tránsito, los cuales no se cumplieron en este caso concreto, como se evidencia de la transcripción de este:

“(…) Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa.”

De lo reseñado de manera precedente, se deduce necesariamente, que el informe que deben realizar las autoridades de tránsito no incluye, bajo ninguna circunstancia referencia alguna a la responsabilidad de los involucrados, ni siquiera como una posible hipótesis, pues la competencia frente a pronunciamientos de responsabilidad no recae sobre estas autoridades y la realización de conceptos técnicos de responsabilidad están sujetos a procedimientos especiales, cuya ejecución no se acredita y por ende, fundamentar la responsabilidad de los demandados sobre este tipo de informe carece de legalidad. De este modo, la presente acción carece de elementos de convicción suficientes que lleven al señor juez a determinar que la responsabilidad del evento de tránsito recae en cabeza del conductor del vehículo de placas LGK783.

En conclusión, en el caso sub examine, la parte demandante pretende atribuir responsabilidad

exclusivamente con el IPAT, el cual contiene una mera hipótesis incapaz de demostrar los elementos estructurales de la responsabilidad a cargo de la parte demandada, razón por la cual el documento no tiene la virtualidad para endilgar responsabilidad alguna a la pasiva, máxime cuando la información que se consigna allí no fue presenciada directamente por el agente de tránsito.

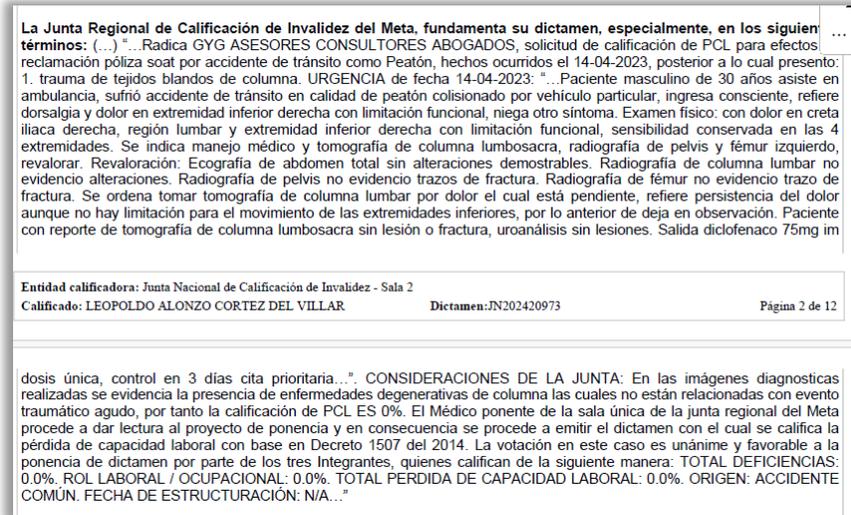
Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

6. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR FALTA DE ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL

Se formula el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al Despacho que en el caso objeto de estudio no es dable declarar la responsabilidad civil que pretende endilgar la parte actora por cuanto la ausencia de medios probatorios que acrediten el hecho dañoso, necesariamente se traduce en la inexistencia de la inferencia lógica que une la conducta desplegada por la pasiva con el supuesto daño padecido por las demandantes, siendo este último un elemento fundante de la responsabilidad civil. Es decir como la parte demandante afirma que el conductor del vehículo de placa LGK783 desplegó el hecho lesivo que a la postre es el generador del daño alegado, dicha afirmación necesariamente requería que se demuestre el nexo causal entre un elemento y otro, empero lo cierto es que en este caso no hay más que afirmaciones huérfanas de prueba que no pueden llevar al juzgador a obtener certeza sobre dicha tesis, razón por la cual no se ha probado este elemento esencial y la responsabilidad no podrá declararse en contra de los demandados.

No solo no se encuentra probado el nexo causal entre la ocurrencia del hecho y la supuesta afectación reclamada, sino que tampoco existe una relación de causalidad entre el hecho y el daño que pretende hacer valer la parte demandante. En efecto, si bien se argumenta que el señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar sufrió lesiones que le generaron una pérdida de capacidad laboral del 20%, lo cierto es que, tanto en el dictamen de la Junta como en su historia clínica, se evidencia

que ya padecía una enfermedad degenerativa en la columna con anterioridad al hecho objeto de debate. Tal y como se evidencia a continuación:



Documento: *Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral – Consideraciones de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta.*

Énfasis del documento: *CONSIDERACIONES DE LA JUNTA: En las imágenes diagnosticas realizadas se evidencia la presencia de enfermedades degenerativas de columna las cuales no están relacionadas con evento traumático agudo, por tanto, la calificación de PCL ES 0%*

En consecuencia, el daño que ahora reclama no obedece a este suceso en particular, sino a una patología preexistente, que nada tiene que ver con el presunto accidente. Adicionalmente, del análisis del video allegado al expediente se observa que el roce que tuvo el demandante con el vehículo no fue de tal magnitud como para generar la incapacidad alegada, por lo que la pretensión de atribuir esta afectación al incidente carece de fundamento.

Vale la pena recordar que la teoría de la causalidad aplicada en Colombia es la causalidad adecuada. A diferencia de la teoría de la equivalencia de condiciones en la que simplemente basta

aplicar el método de la supresión mental hipotética y determinar si el hecho final se hubiere o no presentado o no con determinada actuación. La teoría de la causa adecuada exige un filtro adicional en el que de esa multiplicidad de causas que se pueden presentar en el mundo fenomenológico que pueden ser condiciones *sine qua non*, serán relevantes solo aquellas de las que fuera previsible el resultado. Doctrina autorizada y reciente confluye en aseverar que para declarar la responsabilidad es necesaria la concurrencia de tres elementos indispensables, a saber:

*“Es sabido que para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. **La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto.** Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad.”⁸ – (Subrayado y negrilla por fuera de texto)*

En ese sentido, debe precisarse que una actividad peligrosa es la que puede producir daños incontrolables e imprevisibles, tal como lo advierte la sociología en las situaciones impredecibles, incalculables y catastróficas de la sociedad del riesgo contemporánea. De ahí, que la obligación de indemnizar en este tipo de responsabilidad no puede depender del control o la previsión de las consecuencias, pues ello supondría imponer un criterio de imputación basado en la previsión de lo imprevisible.

⁸ Patiño, Héctor. “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración. Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano”. Revista Derecho Privado N14. Universidad Externado de Colombia. 2008

Ahora bien, la labor persuasiva debe orientarse a establecer cuál de todos los comportamientos antijurídicos ocasionó el daño. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

“(...) aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más ‘adecuado’, el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo”⁹

En efecto, el concepto de peligrosidad de la actividad, empero, no ha sido definido bajo un criterio jurídico general, sino que suele explicarse mediante ejemplos tales como la velocidad alcanzada, la naturaleza explosiva o inflamable de la cosa utilizada, la energía desplegada o conducida, entre otras situaciones cuya caracterización ha sido delimitada por la jurisprudencia.

Del mismo modo, en este punto es menester aclarar que la responsabilidad civil extracontractual supone resarcir un daño generado con ocasión de un hecho que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino que opera entre quienes ha vinculado únicamente el azar. En particular, la responsabilidad civil extracontractual en actividades peligrosas, como sucede con la conducción de vehículos automotores, supone (i) que la víctima demuestre el ejercicio de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad entre ambos; (ii) que el presunto responsable solo podrá exonerarse, salvo norma en contrario, demostrando la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad que rompa el nexo causal; y (iii) que en los casos de actividades peligrosas concurrentes el juez deba examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produce el daño para establecer el grado de responsabilidad que corresponde a cada actor.

⁹ Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 15 de enero de 2008. Expediente 87300.

De manera que en la investigación dirigida a establecer si fue destruido el nexo causal, entre los varios antecedentes que en forma hipotética ocasionaron el daño, únicamente deben dejarse los que, atendiendo los criterios dichos en la jurisprudencia, tuvieron la aptitud para producirlo, mas no los que simplemente emergieron como factores meramente circunstanciales. Por ende, la falencia de este requisito indispensable destruye cualquier posibilidad de erigir válidamente un cargo de responsabilidad en contra de los Demandados.

Así las cosas, para que se configure la responsabilidad civil extracontractual es necesario que concurren los siguientes elementos: i) una conducta humana, positiva o negativa, por regla general antijurídica, ii) un daño o perjuicio, esto es, un detrimento, menoscabo, deterioro, que afecte bienes o intereses ilícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva, iii) una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación y, iv) un factor o criterio de atribución de la responsabilidad, por regla general de carácter subjetivo (dolo o culpa). Presupuestos que no se reúnen en el presente caso.

Para esta etapa procesal no se encuentra probada la existencia de responsabilidad civil que pueda estructurarse e imputarse a los codemandados en razón a que no están acreditadas las circunstancias modales y tempo-especiales del hecho de tránsito. En consecuencia, al no existir criterio material o normativo de imputación del daño a las aquí codemandadas, es forzosa la denegatoria de las pretensiones de la demanda.

En conclusión, para configurarse los elementos de la responsabilidad civil es necesario que concurren los siguientes elementos: i) hecho generador, ii) daño y iii) nexo de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación. Sin embargo, verificados los elementos probatorios que obran dentro del expediente no se logra establecer que se reúnan los elementos de la responsabilidad civil dentro del presente asunto,

puesto que no existe prueba idónea que acredite un nexo de causalidad entre la conducta desplegada por el conductor del vehículo asegurado y los daños que hoy reclama la demandante.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

7. SUBSIDIARIA. CONCURRENCIA DE CULPAS

En gracia de discusión y de manera subsidiaria, debe tenerse en cuenta que en el improbable y remoto evento en que se reconocieran una o algunas de las pretensiones esgrimidas por las demandantes, debe aplicarse la respectiva reducción de la indemnización, en proporción a la contribución de quien estacionó indebidamente el vehículo en la Central de Abastos de Villavicencio, precisamente en la zona donde el demandante, Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, procedía a retirar mercancía, contrariando así específicamente lo establecido en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, causando así el accidente.

Para efectos de lo anterior, es importante traer a este escrito lo preceptuados en el Código Civil respecto a la reducción de la indemnización:

“ARTÍCULO 2537. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN. *La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.”*

Por otra parte, la Corte Suprema de justicia ha indicado que cuando un tercero ha sido participe del hecho, la indemnización debe reducirse:

“Cuando el hecho lesivo es generado por la acción independiente de varias personas, sin que exista convenio previo ni cooperación entre sí, pero de tal suerte que aún de haber actuado aisladamente, el resultado se habría producido lo

*mismo, entonces surge la hipótesis de la causalidad acumulativa o concurrente, prevista en el artículo 2537 del ordenamiento civil, según el cual la apreciación del daño está sujeta a reducción (...)*¹⁰

Conforme a lo dicho, el Despacho debe establecer un análisis causal de las conductas implicadas en el evento dañoso, a fin de determinar la incidencia de quien estacionó indebidamente el vehículo en la Central de Abastos de Villavicencio, precisamente en la zona donde el demandante, Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, procedía a retirar mercancía en la ocurrencia del daño. Lo anterior, a efectos de disminuir la indemnización si es que a ella hubiere lugar, en proporción a su contribución al daño sufrido, como consecuencia de sus conductas imprudentes. Comoquiera que la responsabilidad de los demandados resultó menguada por la participación determinante de quien estacionó indebidamente el vehículo en la Central de Abastos de Villavicencio, precisamente en la zona donde el demandante, Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, procedía a retirar mercancía. De tal suerte que queda completamente claro que el fallador debe considerar el marco de circunstancia en que se produce el daño, así como sus condiciones de modo, tiempo y lugar, a fin de determinar la incidencia causal de la conducta del tercero, en la ocurrencia del daño por el cual la demandante solicita indemnización.

En conclusión, al encontrarse acreditado por medio de las pruebas que obran en el expediente que de quien estacionó indebidamente el vehículo en la Central de Abastos de Villavicencio, precisamente en la zona donde el demandante, Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, procedía a retirar mercancía, tuvo incidencia determinante y significativa en la ocurrencia del accidente de tránsito acaecido el día 14 de abril de 2023, por cuanto creó una situación de riesgo que interfirió en el desarrollo normal del tránsito y contribuyó de manera determinante a la ocurrencia del accidente, contrariando así específicamente lo establecido en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, deberá declararse que el porcentaje de la causación del daño por su parte a lo sumo es del noventa por ciento (90%).

¹⁰ Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia SC-56742018 (20001310300420090019001), Dic. 18/18.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

8. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DE LA CONDUCTA DE LA VÍCTIMA EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO.

En gracia de discusión y de manera subsidiaria, debe tenerse en cuenta que en el improbable y remoto evento en que se demuestre que sí existió un hecho generador imputable a la conductora del vehículo de placas LGK783. Ante esta hipotética circunstancia, de todas maneras, debe aplicarse la respectiva reducción de la indemnización. Lo anterior, en proporción a la contribución que tuvo en el accidente la propia víctima, por lo menos en un 90%. Por supuesto, sin perjuicio de que como ya se demostró en la anterior excepción, no hay prueba del nexo de causalidad entre el actuar de los demandados y el daño.

Todo lo anterior por la compensación de culpas según el precepto contenido en el artículo 2357 del Código Civil, en el que se indica que la reducción de una indemnización se debe por la participación de la víctima. Es decir, si el que ha sufrido el daño se expuso a él imprudentemente. Lo que claramente aconteció en este caso, puesto que no está demostrado que las consecuencias del accidente provengan de los demandados. Conforme a lo dicho, el Despacho debe establecer un análisis causal de las conductas implicadas en el evento dañoso, a fin de determinar la incidencia de la víctima en la ocurrencia del daño. Lo anterior, con el propósito de disminuir la indemnización si es que a ella hubiere lugar, en proporción a su contribución al daño que sufrió. Así es como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 19 de noviembre de 1993:

*“para aquellos eventos en los que tanto el autor de la conducta dañosa como el damnificado concurran en la generación del perjuicio, el artículo 2357 del Código Civil consagra una regla precisa, según la cual **‘[l]a apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente’**”.*

Tradicionalmente, en nuestro medio se le ha dado al mencionado efecto la denominación ‘compensación de culpas’¹¹ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En distinto pronunciamiento, la misma corporación manifestó que en el caso en que la negligencia de la víctima incida para que se exponga imprudentemente al daño, deberá necesariamente realizarse una reducción de la indemnización. Lo anterior fue manifestado en un caso en el que se evidenció la culpa de la víctima en la ocurrencia del daño, estimada en una proporción del 40% de los perjuicios:

“En cuanto a la conducta de la víctima, analizada desde lo culpabilístico, es concurrente del hecho dañoso, por infringir los artículos 77 y 79 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), al aparcar en lugar prohibido y sin encender las luces de parqueo. Empero, la violación de tales normas viales no resultan incidentes en un 50% de la causa del accidente, pues amén de su transgresión, el otro maquinista lo vio a cierta distancia estacionado, sólo que éste fue negligente, pues al no disminuir la velocidad ni cambiar de calzada, chocó con él.

*Sin embargo, **aunque el obrar de Carlos Alirio Méndez Lache no fue determinante en una mitad en la producción del resultado dañoso, su actuar, aunque pasivo por no desarrollar al momento de la colisión la actividad peligrosa de la conducción, fue causante como mínimo del mismo, porque al detenerse sobre la carretera, asumió un riesgo razonablemente previsible, propio de las incidencias de la circulación, como lo es el de resultar impactado, ya sea por la actividad de otro conductor.***

¹¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Radicación No. 3579. No publicada.

Debió entonces tomar “precauciones” a fin de evitar el siniestro, como haber parqueado en una berma, o en un lugar permitido para ello, evitando, en todo caso, convertirse en un obstáculo directo para vehículos en marcha en un segmento de la vía que les permite alcanzar altas velocidades.

Así las cosas, la mencionada negligencia y situación de riesgo provocada por el demandante, conducen a esta Corte, en atención a los elementos concausales y culpabilísticos, a modificar su porcentaje de concurrencia en un 40%.”¹² (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

De tal suerte que queda completamente claro que el fallador debe considerar el marco de circunstancia en que se produce el daño, así como sus condiciones de modo, tiempo y lugar, a fin de determinar la incidencia causal de la conducta de la víctima en la ocurrencia del daño por el cual solicita indemnización. Esto por cuanto, como se ha advertido operó la causal excluyente de responsabilidad denominada “hecho exclusivo de la víctima”. Como se ha analizado en precedencia, el señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar incurrió en una conducta imprudente al situarse en una zona no destinada para la permanencia de peatones ni para la carga y descarga de mercancía, exponiéndose innecesariamente al tránsito de vehículos.

En conclusión, tal como lo ha determinado la jurisprudencia, en caso de probarse que el señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar tuvo incidencia determinante y significativa en la ocurrencia del accidente de tránsito acaecido el 14 de abril de 2023, deberá declararse que el porcentaje de la causación del daño a lo sumo es del 90%. Razón por la cual, de considerarse procedente una indemnización por los perjuicios deprecados, esta debe ser reducida conforme al porcentaje de participación de la víctima en la ocurrencia del accidente, como mínimo en un 90%. Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

¹² Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente 11001-31-03-032-2011-00736-01 . Junio 12 de 2018

9. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO Y TASACIÓN EXORBITANTE DEL DAÑO MORAL.

Debe ponerse de presente que, al margen de la inexistente responsabilidad a cargo de la parte demandada, situación que impedirá cualquier tipo de condena. De todas maneras, la solicitud de perjuicios morales resulta a todas luces improcedente tal como fue solicitado, ya que la demandante solicita la suma de \$110.500.000. Lo anterior, no puede acogerse por el despacho ya que sin el ánimo de minimizar los sentimientos que pudo experimentar el señor Leopoldo Alonzo Cortez y su familia, no puede olvidarse que, ni siquiera en eventos de extrema gravedad que comportan secuelas como daño neuronal irreversible y PCL del 20% o en eventos mucho más graves, la Corte Suprema de Justicia ha accedido a una indemnización como la aquí pretendida. Es decir que en este caso la pretensión es abiertamente exorbitante y desconoce los baremos indemnizatorios que sobre la materia ha fijado el alto Tribunal.

En términos generales, existe un criterio unánime que explica que la reparación de los daños causados como consecuencia de un hecho dañoso tiene un carácter exclusivamente indemnizatorio y no puede ser fuente de enriquecimiento para la parte demandante. En otras palabras, no existe duda alguna que la reparación de los perjuicios tiene la finalidad de llevar a la víctima al estado anterior, esto es, al estado previo a la causación del daño, sin que esto signifique que la parte actora pueda enriquecerse por el reconocimiento de dicha indemnización.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en los mismos términos al establecer:

“Ciertamente puede decirse cuando el artículo 2341 del Código Civil prescribe que el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, se adopta, en armonía con el inciso 2 del artículo 1649 del Código

Civil, el principio según el cual la prestación de la obligación resarcitoria llamada indemnización, tiene como límite cuantitativo aquel que, según su función de dejar indemne (sin daño), alcance a reparar directa o indirectamente el perjuicio ocasionado, para el restablecimiento, en sus diferentes formas, de la misma situación patrimonial anterior (...)”

En otras palabras, es improcedente jurídicamente conceder una indemnización que no solo tenga la finalidad de llevar a la víctima al estado anterior al acaecimiento del hecho dañoso, sino que también tenga el propósito de enriquecer a la parte actora. Lo anterior, por cuanto como se ha explicado, la indemnización de perjuicios no puede ser utilizada como herramienta para enriquecer a la víctima, sino para repararle efectivamente los daños que haya padecido.

Renglón seguido, la estimación que realiza la demandante por concepto de daño moral por la suma de \$110.500.000, significa un enriquecimiento injustificado en beneficio de esta. Lo anterior, considerando que al plenario no fueron aportadas pruebas que logran comprobar la responsabilidad de las demandadas y, en consecuencia, su obligación de indemnizar la accionante por los presuntos perjuicios inmateriales presuntamente padecidos.

Ahora, en el hipotético e improbable caso que dicho perjuicio deba ser reconocido, debe tenerse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia a través de sus múltiples pronunciamientos ha dejado decantados los límites máximos de reconocimiento de perjuicios, como lo es en el caso del daño moral, señalando enfáticamente que ni siquiera en el evento de muerte la Corte Suprema ha accedido a una reparación de como la pretendida en este caso, al efecto veamos como en un evento en donde se acreditó el 20,65% de PCL derivadas de lesiones producidas en un accidente de tránsito se ordenó una suma mucho menor a la solicitada en la demanda:

“Tasación del daño moral para los padres, hermanas y la víctima directa (menor de edad) en quince millones de pesos (\$15.000.000) cada uno, a causa de la

perturbación psíquica, deformidad física permanente y pérdida de su capacidad laboral en un 20,65%, de estudiante universitaria menor de edad, generadas por la colisión entre vehículo de servicio público y la motocicleta que aquella conducía¹³.”

Según la jurisprudencia citada, es inviable el reconocimiento de los perjuicios morales en las sumas pretendidas por la parte demandante. Pues, en primer lugar, solicitar \$110.500.000 en favor estos, resulta exorbitante, dado que el tope indemnizatorio fijado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto de casos análogos al aquí analizado corresponde a QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000) para la víctima y familiares en primer grado de consanguinidad. En virtud de lo anterior, las pretensiones invocadas por la parte demandante evocan un evidente ánimo especulativo.

En el presente caso, no podrá reconocerse indemnización alguna por concepto de daño moral en favor de las señoras Maryini Kirimer Fernández Rodríguez, Mayra Lissett Rodríguez Uzcátegui y Luhanna Isabella Fernández Saez, dado que no se presume la existencia de dicho perjuicio al no estar acreditado en el proceso ningún vínculo de parentesco con el señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar. En efecto, para que proceda el reconocimiento de este tipo de perjuicio, debe existir una relación filial probada, lo cual no ocurre en este caso, pues no se ha aportado ningún elemento que acredite la calidad de hijas de crianza o de compañera permanente que las demandantes alegan. Por lo tanto, cualquier reclamación en este sentido exige prueba fehaciente del vínculo y del daño, sin que pueda presumirse su existencia en el presente asunto.

En conclusión, no está acreditada de ninguna forma la obligación de indemnizar, en el entendido que la suma solicitada por la parte demandante por concepto de daño moral y su reconocimiento significa un enriquecimiento injustificado en beneficio de la misma. Lo previamente expuesto, por

¹³ Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC5885-2016, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Citada en Compendio el daño extrapatrimonial y su cuantificación

cuanto no se ha probado que el extremo pasivo le haya generado algún tipo de perjuicio moral a la parte demandante, por lo que no tendría razón para resultar condenado a pagar un perjuicio que no causó. De contera que solo en el improbable caso que el Juez considere que se debe reconocer esta tipología de daño, corresponderá al arbitrio del mismo determinar el valor del daño moral, teniendo en cuenta los elementos probatorios que reposan en el expediente. Además, teniendo como parámetro y límite los baremos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia en casos análogos al aquí analizado.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

10. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO POR “DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN”

En primer lugar, es menester indicar que analizando el caso en concreto, dentro del expediente no se demuestra que el accidente ocurrido el 14 de abril de 2023 haya generado lesión alguna que afecte la vida en relación del señor Leopoldo Cortez. Tan es así, que el dictamen de PCL aportado con la demanda no hace referencia a una incidencia laboral o personal que implique una complicación en su vida y quehaceres diarios. Es decir, que se encuentra en capacidades laborales, físicas y psicológicas para tener un trabajo, desarrollar sus labores y continuar con una vida cotidiana con normalidad. En otras palabras, es improcedente el reconocimiento del daño a la vida de relación, teniendo en cuenta que no se encuentra comprobado dentro del plenario la afectación para solicitarlo.

Renglón seguido, la estimación que realiza la parte demandante por concepto de daño a la vida en relación por la suma de \$32.500.000, significa un enriquecimiento injustificado en beneficio de esta. Lo anterior, considerando que al plenario no fueron aportadas pruebas que logran comprobar la responsabilidad de las demandadas y, en consecuencia, su obligación de indemnizar la accionante por los presuntos perjuicios inmateriales presuntamente padecidos.

Ahora, en el hipotético e improbable caso que dicho perjuicio deba ser reconocido, debe tenerse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia a través de sus múltiples pronunciamientos ha dejado decantados los límites máximos de reconocimiento de perjuicios, como lo es en el caso del daño a la vida en relación en casos donde se aporta PCL aproximado del 20%, señalando enfáticamente que ni siquiera en el evento de muerte la Corte Suprema ha accedido a una reparación de como la pretendida en este caso, al efecto veamos como en un evento en donde se acreditó el 20,65% de PCL derivadas de lesiones producidas en un accidente de tránsito se ordenó una suma mucho menor a la solicitada en la demanda:

“Tasación del daño a la vida de relación para la víctima directa (menor de edad) en veinte millones de pesos (\$20.000.000), por la perturbación psíquica, deformidad física permanente y pérdida de su capacidad laboral en un 20.65%, de estudiante universitaria menor de edad, generadas por la colisión entre vehículo de servicio público y la motocicleta que aquella conducía. (SC5885-2016, 06/05/2016).”¹⁴

Según la jurisprudencia citada, es inviable el reconocimiento del daño a la vida de relación en las sumas pretendidas por la parte Demandante, puesto que evidentemente son especulativas. Nótese como en casos análogos en los cuales existen lesiones, la Corte Suprema de Justicia, ha fallado una suma equivalente a \$20.000.000 reconocidos a la víctima directa cuando existe una pérdida de capacidad igual. Además de lo anterior, de manera preliminar se anticipa que en el acápite de pruebas se solicitará la contradicción del Dictamen de PCL, en tanto corresponderá al debate probatorio determinar si las consideraciones y conclusiones de dicha entidad guardan relación directa con secuelas derivadas del accidente referido en la demanda, o si, por el contrario, obedecen a enfermedades o patologías previas del paciente. En tanto según el extracto de la HC, es claro que las lesiones que sufrió el señor Leopoldo Cortez no tienen la magnitud de configurar una pérdida

¹⁴ Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC5885-2016, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Citada en Compendio el daño extrapatrimonial y su cuantificación

de capacidad laboral suficiente para solicitar la suma pretendida. Es por ello que no es viable el reconocimiento en la elevada suma solicitada.

Así las cosas, ante la desmesurada solicitud de daño a la vida de relación estimado en \$32.500.000 es claro que no podrá proceder tal pretensión, toda vez que es evidente el ánimo especulativo de la errónea tasación de este perjuicio, en tanto el mismo resulta caprichosamente cuantificado. Lo anterior, como quiera que se derivan de una estimación excesiva del supuesto daño a la vida de relación que pretende.

En conclusión, es claro que no hay lugar al reconocimiento de este tipo de perjuicios como quiera que los mismos no están demostrados. En consecuencia, ante la falta de prueba de que las lesiones privaron al Demandante de realizar actividades que hagan agradable la existencia la pretensión debe ser negada. Sin embargo, en el remoto e hipotético evento en el cual fuere reconocido, es inviable el reconocimiento del daño a la vida de relación en la suma pretendida por la parte Demandante, por cuanto la tasación propuesta es equivocada y en tal sentido, no hay lugar al reconocimiento de la pretensión indemnizatoria.

11. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES SOLICITADOS – LUCRO CESANTE

No podrá reconocerse suma alguna por concepto de lucro cesante toda vez que el cálculo realizado por la parte demandante carece de fundamento. La falta de evidencia concluyente sobre su imposibilidad de trabajar hace improcedente cualquier reclamo por lucro cesante. Por tanto, las sumas solicitadas por los demandantes carecen de fundamento debido a la ausencia de pruebas claras y suficientes que acrediten los ingresos percibidos previamente de forma constante y cierta. Ahora bien, es importante que se tenga en cuenta que según dictamen de pérdida de capacidad laboral aportado para soportar el perjuicio por Lucro Cesante, se advierte del mismo que este analizó una enfermedad que con base en la Historia Clínica como “presencia de enfermedades

degenerativas de columna” que no es una consecuencia derivada del accidente de tránsito que se reprocha; es decir ese factor que sumó al porcentaje de pérdida de capacidad laboral, hoy no puede considerarse para tasar un lucro cesante y por tanto no puede incluirse en ese cálculo de PCL.

Para empezar, debe hacerse remembranza sobre los aspectos fundamentales que configuran el lucro cesante. Éste se ha entendido cómo una categoría de perjuicio material, de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

(...) en cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. (...) Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afina en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente (...)

*Por último, están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que **conjeturas o eventuales perjuicios***

que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables.¹⁴ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente. Sin que ninguna de esas deducciones pueda estar soportada en simples suposiciones o conjeturas, porque de ser así, se estaría en frente de una utilidad meramente hipotética o eventual.

En el caso sub judice, no puede presumirse el lucro cesante a favor del señor Jenny Consuelo Quiñones, como consecuencia de que:

- *Respecto a la actividad desarrollada por el señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar.*

Debe advertirse que el señor Leopoldo Alonzo Cortez del Villar no ha aportado prueba, ni siquiera sumaria, que acredite que asumía el pago de al menos un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). En ausencia de una demostración fehaciente del perjuicio alegado, no se configura el requisito esencial de la prueba cierta del daño, lo que torna improcedente su reconocimiento dentro del proceso.

- *Respecto del cálculo del Lucro Cesante basado en el PCL*

Es importante advertirle al Despacho que el cálculo por medio del cual se está liquidando el lucro cesante se toma erróneamente como base el Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral expedido por la Junta Nacional de Calificación para la calenda del 03 de septiembre de 2024. Ello, si se tiene en cuenta que la demandante a dicha fecha, no se había alcanzado un nivel de mejoría máxima como indica el manual único de calificación. Además., se dejaron de evaluar aspectos que si fueron

evaluados por la Junta Regional de Calificación del meta como lo *presencia de enfermedades degenerativas de columna las cuales no están relacionadas con evento traumático agudo*. Tal y como se evidencia a continuación:

La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, fundamenta su dictamen, especialmente, en los siguientes términos: (...) "...Radica GYG ASESORES CONSULTORES ABOGADOS, solicitud de calificación de PCL para efectos de reclamación póliza soat por accidente de tránsito como Peatón, hechos ocurridos el 14-04-2023, posterior a lo cual presento: 1. trauma de tejidos blandos de columna. URGENCIA de fecha 14-04-2023: "...Paciente masculino de 30 años asiste en ambulancia, sufrió accidente de tránsito en calidad de peatón colisionado por vehículo particular, ingresa consciente, refiere dorsalgia y dolor en extremidad inferior derecha con limitación funcional, niega otro síntoma. Examen físico: con dolor en creta iliaca derecha, región lumbar y extremidad inferior derecha con limitación funcional, sensibilidad conservada en las 4 extremidades. Se indica manejo médico y tomografía de columna lumbosacra, radiografía de pelvis y fémur izquierdo, revalorar. Revaloración: Ecografía de abdomen total sin alteraciones demostrables. Radiografía de columna lumbar no evidencio alteraciones. Radiografía de pelvis no evidencio trazos de fractura. Radiografía de fémur no evidencio trazo de fractura. Se ordena tomar tomografía de columna lumbar por dolor el cual está pendiente, refiere persistencia del dolor aunque no hay limitación para el movimiento de las extremidades inferiores, por lo anterior de deja en observación. Paciente con reporte de tomografía de columna lumbosacra sin lesión o fractura, uroanálisis sin lesiones. Salida diclofenaco 75mg im

Entidad calificadoradora: Junta Nacional de Calificación de Invalidez - Sala 2
Calificado: LEOPOLDO ALONZO CORTEZ DEL VILLAR Dictamen: JN202420973 Página 2 de 12

dosis única, control en 3 días cita prioritaria...". CONSIDERACIONES DE LA JUNTA: En las imágenes diagnosticas realizadas se evidencia la presencia de enfermedades degenerativas de columna las cuales no están relacionadas con evento traumático agudo, por tanto la calificación de PCL ES 0%. El Médico ponente de la sala única de la junta regional del Meta procede a dar lectura al proyecto de ponencia y en consecuencia se procede a emitir el dictamen con el cual se califica la pérdida de capacidad laboral con base en Decreto 1507 del 2014. La votación en este caso es unánime y favorable a la ponencia de dictamen por parte de los tres Integrantes, quienes califican de la siguiente manera: TOTAL DEFICIENCIAS: 0.0%. ROL LABORAL / OCUPACIONAL: 0.0%. TOTAL PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL: 0.0%. ORIGEN: ACCIDENTE COMÚN. FECHA DE ESTRUCTURACIÓN: N/A..."

Documento: *Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral – Consideraciones de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta.*

Énfasis del documento: *CONSIDERACIONES DE LA JUNTA: En las imágenes diagnosticas realizadas se evidencia la presencia de enfermedades degenerativas de columna las cuales no están relacionadas con evento traumático agudo, por tanto la calificación de PCL ES 0%*

Así pues, no resulta procedente la pretensión impetrada según la cual debe reconocerse y pagarse en favor de la Demandante, sumas de dinero por concepto de lucro cesante. Toda vez que, **(i)** no prueba el ingreso dejado de percibir, pues no aporta prueba siquiera sumaria que así lo acredite y

(ii) Además, no puede olvidarse la indebida tasación del Lucro Cesante con el PCL de la demandante, mismo que a toda luz no puede ser tenido en cuenta en tanto, se le calificaron deficiencias con *presencia de enfermedades degenerativas de columna las cuales no están relacionadas con evento traumático agudo*. En consecuencia, se trata de una mera expectativa que atenta contra el carácter cierto del perjuicio y por tanto, no puede presumirse valor alguno para indemnizar el lucro cesante solicitado por la parte actora.

En conclusión, no puede existir reconocimiento de lucro cesante como quiera que no prueba el ingreso dejado de percibir, pues no aporta prueba siquiera sumaria que así lo acredite. Además, queda claro que el cálculo realizado por dicho perjuicio no corresponde a la realidad, en tanto deberá tenerse en cuenta que el Dictamen de Pérdida de Capacidad de la demandante que determina un porcentaje de más de 20%, califica deficiencias que no tienen nada que ver con el supuesto daño alegado. En ese sentido, la demanda careció de una carga probatoria que además de certera, la misma fuera conducente con el fin de acreditar y demostrar el lucro cesante solicitado. Lo anterior, en tanto tal como lo ha dispuesto la jurisprudencia, quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario, ya que a nadie le es dado el privilegio de que su mero dicho sea prueba suficiente de lo que afirma.

Por lo anterior, ruego señor juez declarar probada esta excepción.

12. GENÉRICA O INNOMINADA

En virtud del mandato contenido en el artículo 282 del CGP, solicito al Despacho declarar de oficio todas aquellas excepciones que se acrediten en el proceso, no solamente respecto de la contestación de la demanda, sino también, respecto de cualquier otro acto procesal.

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO

1. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Es necesario aclarar que para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la Aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. Dado que en el presente caso no se demostró la realización del riesgo asegurado, por cuanto operó una causal eximente de responsabilidad frente a las demandadas, en tanto e quien estacionó indebidamente el vehículo en la Central de Abastos de Villavicencio, precisamente en la zona donde el demandante, Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, procedía a retirar mercancía creó una situación de riesgo que interfirió en el desarrollo normal del tránsito y contribuyó de manera determinante a la ocurrencia del accidente de tránsito. Igualmente, es relevante examinar la conducta de la víctima, quien se encontraba en una zona de tránsito vehicular con la aparente intención de descargar mercancía, pese a que dicho espacio está destinado para la circulación de vehículos. Adicionalmente, debido a que no se acreditó la cuantía de la pérdida, en tanto estos se solicitan de forma exorbitante y con base en un dictamen de pérdida de capacidad laboral que de manera preliminar se anticipa que en el acápite de pruebas se solicitará su contradicción, en tanto corresponderá al debate probatorio determinar si las consideraciones y conclusiones de dicha entidad guardan relación directa con secuelas derivadas del accidente referido en la demanda, o si, por el contrario, obedecen a enfermedades o patologías previas del accidentado., en consecuencia se desdibuja así el verdadero carácter del daño, y por contera la falta de prueba de dicho elemento esencial de la indemnización comporta que la obligación condicional de la aseguradora no nazca a la vida jurídica.

Es necesario aclarar que, para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la Aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. Es por ello que, para efectos de las reclamaciones por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte demandante, quien tiene la intención de percibir una indemnización con cargo al contrato de seguro. En ese sentido el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció:

“ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.

El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.” - (Subrayado por fuera de texto)

Lo anterior le impone al accionante la carga de demostrar el supuesto de hecho de la norma que invoca a su favor, es decir, probar tanto la realización del riesgo asegurado como la cuantía de la pérdida. El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, así como de la cuantía de la pérdida, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

“Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguraticio, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del

riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (...)”

“(...) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro, **el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su pérdida.** (...) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago...[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (...)*”

“(...) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080)¹⁵” - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

La importancia de la acreditación probatoria de la ocurrencia del siniestro, de la existencia del daño y su cuantía, se circunscribe a la propia filosofía resarcitoria del seguro, consistente en reparar el

¹⁵ ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125.

daño acreditado y nada más que este, puesto que de lo contrario el asegurado o beneficiario podría enriquecerse sin justa causa, al indemnizarle un daño inexistente. En esta línea ha indicado la Corte Suprema de Justicia:

“2.1. La efectiva configuración del riesgo amparado, según las previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, “da origen a la obligación del asegurador”.

2.2. En consonancia con ello, “[e]l asegurado o el beneficiario [están] obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro” (art. 1075, ib.), información que en el caso de la póliza de que se trata, debía verificarse “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia de un tratamiento de las enfermedades de Alto Costo relacionada en la Cláusula Primera, así no afecte la Cobertura provista mediante la presente póliza” (cláusula décima, condiciones generales, contrato de seguro).

2.3. Pero como es obvio entenderlo, no bastaba con reportar el siniestro, sino que era necesario además “demostrar [su] ocurrencia (...), así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” (art. 1077, ib.).

2.4 Esos deberes acentúan su importancia en los seguros de daños, como el que es base de la acción, toda vez que ellos, “[r]especto del asegurado”, son “contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento” (art. 1088, ib.), de modo que “la indemnización no excederá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento de siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario” (art. 1089, ib.)¹⁶.

¹⁶ Sentencia SC2482-2019 de 9 de julio de 2019, Radicación n.º 11001-31-03-008-2001-00877-01. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. MP: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado

“(...) 131. Un sujeto de derecho privado debe acudir a las disposiciones especiales sobre el contrato de seguros, contenidas en el Código de Comercio, en especial, al artículo 1077, que indica que le “corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso”. Así mismo, tal y como lo indicó el demandante en su recurso de apelación, la entidad demandada “debía demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida”, y no ampararse en un acto administrativo, para derivar de allí, entre otras consideraciones, su presunción de legalidad, y declarar unilateralmente la ocurrencia del siniestro de incumplimiento y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

132. En conclusión, una entidad estatal cuyos actos y contratos se rijan por el derecho privado, deberá realizar las mismas actuaciones que el resto de sujetos de derecho privado; así, para el caso del contrato de seguros, deberá acudir a la aseguradora a demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de los perjuicios. (...)¹⁷

La Corte Suprema de Justicia, ha establecido la obligación del asegurado en demostrar la cuantía de la pérdida:

“(...) Se lee en las peticiones de la demanda que la parte actora impetra el que se determine en el proceso el monto del siniestro. Así mismo, no cuantifica una pérdida. De ello se colige con claridad meridiana que la

¹⁷ Consejo de Estado, Sentencia del diecinueve (19) de junio de dos mil diecinueve (2019) Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA Radicación número: 85001-23-31-001-2008-00076-01(39800).

demandante no ha cumplido con la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía que le imponen los artículos 1053 y 1077 del C. de Comercio. En consecuencia y en el hipotético evento en que el siniestro encontrare cobertura bajo los términos del contrato de seguros, la demandante carece de derecho a demandar el pago de los intereses moratorios¹⁸ - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando se quiera hacer efectiva la garantía, se deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también se deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de Comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del Asegurador. A efectos de aclararle al Despacho las razones por las que no se encuentran cumplidas las cargas del artículo 1077, se debe dividir la excepción en dos subcapítulos, que permitirán un mejor entendimiento del argumento.

(i) La no realización del Riesgo Asegurado.

Sin perjuicio de las demás excepciones de la contestación de la demanda, se formula esta de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas la Póliza de Seguro de Autos Clónico – Livianos Particulares No. 023056430 / 2658, toda vez que de la mera lectura podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Mediante la póliza en virtud de la cual se vinculó a mi procurada al presente litigio, la Aseguradora cubre la Responsabilidad Civil Extracontractual atribuible al asegurado cuando deba asumir un daño derivado de una reclamación basada en una responsabilidad de carácter extracontractual y de la cual se pretenda obtener una indemnización.

¹⁸ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil M.P. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 1100131030241998417501.

Sin embargo, en este caso encontramos que tal responsabilidad no se estructuró, pues ante la inexistencia de nexo causal entre las conductas desplegadas por el conductor del vehículo asegurado y el daño reclamado por la parte actora, no procede reclamación alguna con cargo a la póliza de seguro. Puesto que no se han reunido los elementos esenciales para que sea procedente declarar la Responsabilidad Civil Extracontractual.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la Aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria. Pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la responsabilidad en que incurra el asegurado. Sin embargo, los demandantes no lograron estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo del conductor del vehículo asegurado y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la Aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró. El riesgo fue descrito dentro de las condiciones del contrato de seguros, de la siguiente manera:

6. Responsabilidad Civil Extracontractual

La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el lucro cesante y daño moral, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados, que cause el asegurado o el conductor autorizado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley, proveniente de un accidente de tránsito ocasionado por el vehículo descrito en esta póliza.

El valor asegurado, señalado en la carátula de la póliza, representa el límite máximo de la indemnización a pagar por daños a bienes de terceros y/o muerte o lesiones a terceras personas. Este monto asegurado se considera como límite único combinado restituible por evento.

Estos límites operarán en exceso de los pagos correspondientes a los amparos o coberturas que tengan carácter indemnizatorio o reparatorio del daño en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, FOSYGA, PAS (Planes Adicionales de Salud), EPS, ARL, ARS, Fondos de Pensiones, o de otras entidades de seguridad social.

Dicho lo anterior, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que no existe nexo causal, pues no se ha demostrado

que los perjuicios ocurrieron como consecuencia de las acciones u omisiones del asegurado o el conductor del vehículo. Como consecuencia, no ha nacido la obligación condicional por parte de la Aseguradora.

Esto además, porque si bien la Póliza de Seguro de Autos Clonico – Livianos Particulares No. 023056430 / 2658 establece que indemnizará los perjuicios, incluyendo el lucro cesante y el daño moral, también condiciona dicho reconocimiento a que estos se encuentren debidamente acreditados, lo cual no ocurre en el presente caso. No existe prueba suficiente que permita demostrar la existencia y magnitud de los perjuicios reclamados por la parte demandante.

Adicionalmente, la póliza señala expresamente que cubre los perjuicios que cause el asegurado o el conductor autorizado con motivo de la responsabilidad derivada del accidente. Sin embargo, los daños que aquí se reclaman, particularmente los derivados de la pérdida de capacidad laboral (PCL) del 20%, no obedecen al accidente de tránsito, sino a una enfermedad preexistente del demandante, tal como consta en su historia clínica y en el dictamen de la junta médica. En consecuencia, pretender imputar estos perjuicios a la parte demandada y derivar su pago de la póliza de seguro es improcedente, pues el nexo causal entre el hecho y el daño reclamado no se encuentra demostrado.

(ii) Acreditación de la cuantía de la pérdida.

Es claro que en el presente caso no procede el reconocimiento de indemnización alguna por perjuicios patrimoniales, toda vez que no se encuentran debidamente acreditados dentro del proceso. Lo anterior, puesto que la demandante solicitó el reconocimiento de perjuicios por concepto de daño emergente y por concepto de lucro cesante, sin embargo, se advierten las siguientes falencias:

Respecto de la solicitud por daño moral. Debe ponerse de presente que, al margen de la inexistente

responsabilidad a cargo de la parte demandada, situación que impedirá cualquier tipo de condena. De todas maneras, la solicitud de perjuicios morales resulta a todas luces improcedente tal como fue solicitado, ya que la demandante solicita la suma de \$110.500.000. Lo anterior, no puede acogerse por el despacho ya que sin el ánimo de minimizar los sentimientos que pudo experimentar el señor Leopoldo Alonzo Cortez, no puede olvidarse que, ni siquiera en eventos de extrema gravedad que comportan secuelas como daño neuronal irreversible y PCL del 20% o en eventos mucho más graves, la Corte Suprema de Justicia ha accedido a una indemnización como la aquí pretendida. Es decir que en este caso la pretensión es abiertamente exorbitante y desconoce los baremos indemnizatorios que sobre la materia ha fijado el alto Tribunal. Además, se incluyen reclamaciones por perjuicios morales de tres personas que de cara a la ley no han acreditado tener parentesco con la víctima directa. Luego entonces, no están legitimadas, no está probado su perjuicio y no podrá reconocerse.

Respecto del daño a la vida en relación es menester indicar que, analizando el caso en concreto, dentro del expediente no se demuestra que el accidente ocurrido el 14 de abril de 2023 haya generado lesión alguna que afecte la vida en relación del señor Leopoldo Cortez. Tan es así, que el dictamen de PCL aportado con la demanda no hace referencia a una incidencia laboral o personal que implique una complicación en su vida y quehaceres diarios. Es decir, que se encuentra en capacidades laborales, físicas y sicológicas para tener un trabajo, desarrollar sus labores y continuar con una vida cotidiana con normalidad. En otras palabras, es improcedente el reconocimiento del daño a la vida de relación, teniendo en cuenta que no se encuentra comprobado dentro del plenario la afectación para solicitarlo.

No podrá reconocerse suma alguna por concepto de lucro cesante toda vez que el cálculo realizado por la parte demandante carece de fundamento. La falta de evidencia concluyente sobre su imposibilidad de trabajar hace improcedente cualquier reclamo por lucro cesante. Por tanto, las sumas solicitadas por los demandantes carecen de fundamento debido a la ausencia de pruebas claras y suficientes que acrediten los ingresos percibidos previamente de forma constante y cierta.

Ahora bien, es importante que se tenga en cuenta que según dictamen de pérdida de capacidad laboral aportado para soportar el perjuicio por Lucro Cesante, se advierte del mismo que este analizó una enfermedad que con base en la Historia Clínica como “presencia de enfermedades degenerativas de columna” que no es una consecuencia derivada del accidente de tránsito que se reprocha; es decir ese factor que sumó al porcentaje de pérdida de capacidad laboral, hoy no puede considerarse para tasar un lucro cesante y por tanto no puede incluirse en ese cálculo de PCL.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse en primera medida que la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado. Al contrario, se observa que lo que operó en el presente caso fue el eximente de responsabilidad relativo al hecho exclusivo de un tercero, quien con su conducta imprudente e irregular estacionó indebidamente el vehículo en la Central de Abastos de Villavicencio, precisamente en la zona donde el demandante, Leopoldo Alonzo Cortez del Villar, procedía a retirar mercancía ocasionó el accidente o en gran medida aumento sus probabilidades. Igualmente, es relevante examinar la conducta de la víctima, quien se encontraba en una zona de tránsito vehicular con la aparente intención de descargar mercancía, pese a que dicho espacio está destinado para la circulación de vehículos. Por otro lado, respecto a la acreditación de la cuantía de la supuesta pérdida, no se encuentra probada, comoquiera que no existe prueba que acredite la tipología de daño deprecada en la demanda con ocasión del accidente de tránsito. Del incumplimiento de las cargas que imperativamente establece el artículo 1077 del Código del Comercio por la parte demandante, basta con remitirnos a las pruebas aportadas con la demanda, en donde se evidencia la carencia de elementos demostrativos que acrediten la realización del riesgo asegurado y la supuesta pérdida. Por tanto, es claro que no se cumplen las cargas del artículo 1077 del Código de Comercio por lo que deberán negarse las pretensiones de la demanda.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

2. RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOS CLONICO – LIVIANOS PARTICULARES NO. 023056430 / 2658.

Sin perjuicio de las excepciones precedentes, se plantea que dentro de las condiciones particulares de la Póliza de Seguro de Autos Clónico – Livianos Particulares No. 023056430 / 2658 suscrita entre mi representada y Banco Finandina S.A., se establecieron los parámetros que enmarcan la obligación condicional y la delimitación de la extensión del riesgo asumido Allianz Seguros S.A. En efecto, en ella se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato, y definen de manera explícita las condiciones del negocio asegurativo, es por ello que, si en el curso del proceso se prueban aquellos supuestos fácticos de alguna causal de exclusión, no puede surgir obligación alguna a cargo de mi procurada, en tanto, las partes del seguro pactaron la delimitación de los riesgos que le eran transferidos a la aseguradora y aquellos parámetros son los que el juzgador debe analizar de cara a la resolución de la relación jurídica que envuelve a la compañía de seguros, y se abstendrá de imponerle condena alguna cuando se prueben los hechos que sustentan alguna exclusión de cobertura.

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de hechos o condiciones que en caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza y por lo tanto delimitan el marco de aplicación del seguro. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

“En efecto, no en vano los artículos 1056¹⁹ y 1120 del Código de Comercio, permiten al asegurador, con las restricciones legales, escoger los riesgos que a su arbitrio tenga a bien en amparar y estipular las exclusiones expresas de riesgos inherentes a dicha actividad.

¹⁹ Dice el precepto: “Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”.

Por lo demás, debe la empresa de seguros tener presentes que, en la delimitación del riesgo, no debe vaciar de contenido ese que asume pues tal postura conllevaría a un remedo de amparo sin traslación efectiva de riesgos, sucesos que originan pérdidas y, en suma, desembolsos económicos”.²⁰

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia definió la inexistencia de responsabilidad del asegurador cuando el riesgo se encuentra expresamente excluido, así:

*“Este principio de la universalidad que informa al seguro de transporte, entre otros más, justifica las precisas diferencias que, en lo pertinente, existen con las demás clases de seguros. **Así, por vía de ejemplo, en lo tocante con la delimitación del riesgo**, mientras el artículo 1056 del Código de Comercio permite que el asegurador, a su arbitrio, asuma “todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”, el art. 1120 ib. preceptúa que el seguro de transporte “comprende todos los riesgos inherentes al transporte, salvo el deterioro por el simple transcurso del tiempo y los riesgos expresamente excluidos” (Se subraya), luego, **en este último negocio asegurativo, el asegurador es responsable cuando la pérdida sea ocasionada por uno de los “riesgos inherentes al transporte”, salvo que el riesgo se encuentre expresa e inequívocamente excluido por las partes**”²¹ – (Subrayado y negrilla por fuera de texto.*

Bajo esa misma interpretativa, la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 13 de diciembre de 2018, indicó que las exclusiones de tipo convencional estipuladas en los contratos de seguro no comprometen la responsabilidad del asegurador, en virtud de la facultad prevista en el

²⁰ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC4527-2020. M.P. Francisco Ternera Barrios.

²¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de enero de 2007. Exp. 2000-5492-01. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo.

artículo 1056 del Código de Comercio:

*“Las exclusiones de tipo convencional deben entenderse, como es apenas obvio, como aquellas pactadas por las partes o, cuando menos, **en las que existe consentimiento respecto de las indicadas en el clausulado preestablecido, en los denominados acuerdos de adhesión y que, siendo origen del siniestro o consecuencia del mismo, no comprometen la responsabilidad del asegurador.**”*

Esas cláusulas son válidas, inicialmente, en tanto se sustentan en el principio de la libre autonomía de las partes, cuyos límites son el orden público y las buenas costumbres; de ahí que el artículo 1056 consagre la posibilidad del asegurador de, «a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado»²² - (Subrayado y negrilla por fuera de texto).

Así las cosas, según la jurisprudencia previamente expuesta, se evidencia como se exhorta a los jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en el Contrato de Seguro. Razón por la cual, es necesario señalar que en la Póliza de Seguro de Autos Clónico – Livianos Particulares No. 023056430 / 2658, emitida por Allianz Seguros S.A.. en sus condiciones generales y particulares, señala una serie de exclusiones para todas las coberturas, y de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones que constan en la misma caratula de la póliza o en el clausulado general de aquella, no podrá existir responsabilidad en cabeza de Allianz Seguros S.A., por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación del Contrato de Seguro, pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro

²² Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC5327-2018. Magistrado Ponente: Luis Alfonso Rico Puerta.

del proceso alguna de ellas, la Póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización, por lo que deberán negarse las pretensiones respecto a mi mandante.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

3. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS.

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que, la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado y mucho menos al daño efectivamente demostrado, en ese sentido, como en este caso no se ha demostrado que el extremo activo haya sufrido un daño moral, daño a la vida en relación y lucro cesante en la intensidad que menciona, como tampoco ha corroborado que estos hayan sido causados por el conductor del vehículo asegurado, se generaría un enriquecimiento injustificado a favor de la parte demandante si el despacho concediera las pretensiones, lo que indefectiblemente vulneraría el carácter meramente indemnizatorio.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado

*como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato”.*²³

Se puede concluir entonces que el Contrato de Seguro tiene un carácter meramente indemnizatorio y por tal motivo, tiene como finalidad llevar a la víctima al estado anterior, más no enriquecerla. Es por ello por lo que, aterrizando al caso en cuestión no es de recibo indemnizar el daño tal y como fue pretendido por la parte Demandante, más aún, teniendo en cuenta las tasaciones exorbitantes de sus perjuicios no probados. En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

“Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso” (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización. Es decir, no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Conforme a ello, en caso de pagarse suma alguna que no esté debidamente acreditada por la parte accionante, se estaría contraviniendo el citado principio de mera indemnización del contrato de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad a cargo de la parte pasiva y eventualmente enriqueciendo al accionante.

²³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de julio de 1999. Expediente:5065

No puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiene a un carácter meramente indemnizatorio. Así las cosas, de efectuar cualquier pago por concepto de daño moral, daño a la vida en relación, daño emergente o lucro cesante, emolumentos que no se encuentran debidamente acreditados, implicaría un enriquecimiento para la parte demandante y en esa medida se violaría el principio indemnizatorio del seguro. En otras palabras, si se reconocieran los daños pretendidos se transgrediría el principio indemnizatorio del seguro toda vez que se estaría enriqueciendo al extremo actor en lugar de repararlo. Lo anterior comoquiera que:

Respecto de la solicitud por daño moral. Debe ponerse de presente que, al margen de la inexistente responsabilidad a cargo de la parte demandada, situación que impedirá cualquier tipo de condena. De todas maneras, la solicitud de perjuicios morales resulta a todas luces improcedente tal como fue solicitado, ya que la demandante solicita la suma de \$110.500.000. Lo anterior, no puede acogerse por el despacho ya que sin el ánimo de minimizar los sentimientos que pudo experimentar el señor Leopoldo Alonzo Cortez, no puede olvidarse que, ni siquiera en eventos de extrema gravedad que comportan secuelas como daño neuronal irreversible y PCL del 20% o en eventos mucho más graves, la Corte Suprema de Justicia ha accedido a una indemnización como la aquí pretendida. Es decir que en este caso la pretensión es abiertamente exorbitante y desconoce los baremos indemnizatorios que sobre la materia ha fijado el alto Tribunal.

Respecto del daño a la vida en relación es menester indicar que, analizando el caso en concreto, dentro del expediente no se demuestra que el accidente ocurrido el 14 de abril de 2023 haya generado lesión alguna que afecte la vida en relación del señor Leopoldo Cortez. Tan es así, que el dictamen de PCL aportado con la demanda no hace referencia a una incidencia laboral o personal que implique una complicación en su vida y quehaceres diarios. Es decir, que se encuentra en capacidades laborales, físicas y psicológicas para tener un trabajo, desarrollar sus labores y continuar con una vida cotidiana con normalidad. En otras palabras, es improcedente el reconocimiento del daño a la vida de relación, teniendo en cuenta que no se encuentra comprobado

dentro del plenario la afectación para solicitarlo.

No podrá reconocerse suma alguna por concepto de lucro cesante toda vez que el cálculo realizado por la parte demandante carece de fundamento. La falta de evidencia concluyente sobre su imposibilidad de trabajar hace improcedente cualquier reclamo por lucro cesante. Por tanto, las sumas solicitadas por los demandantes carecen de fundamento debido a la ausencia de pruebas claras y suficientes que acrediten los ingresos percibidos previamente de forma constante y cierta. Ahora bien, es importante que se tenga en cuenta que según dictamen de pérdida de capacidad laboral aportado para soportar el perjuicio por Lucro Cesante, se advierte del mismo que este analizó una enfermedad que con base en la Historia Clínica como “presencia de enfermedades degenerativas de columna” que no es una consecuencia derivada del accidente de tránsito que se reprocha; es decir ese factor que sumó al porcentaje de pérdida de capacidad laboral, hoy no puede considerarse para tasar un lucro cesante y por tanto no puede incluirse en ese cálculo de PCL.

En conclusión, teniendo en cuenta que la parte demandante no acreditó, a través de elementos probatorios útiles, necesarios y pertinentes la cuantía y la existencia de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos, solicito al Honorable Despacho no reconocer su pago, toda vez que con su reconocimiento se vulneraría el carácter indemnizatorio del contrato de seguro. Dicho de otro modo, la correcta valoración del daño persigue una efectiva reparación frente al daño que se alega, por eso una inadecuada valoración de los perjuicios se constituye en fuente de enriquecimiento, poniendo en entredicho la reparación misma de los perjuicios y el carácter indemnizatorio del contrato de seguro.

4. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO.

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que la Póliza que hoy nos ocupa sí presta cobertura para los hechos objeto de este litigio, además que cumple con el requisito de su

operación en exceso y que sí se realizó el riesgo asegurado y que en este sentido sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de Allianz Seguros S.A. Exclusivamente bajo esta hipótesis, el Juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.

La norma antes expuesta es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia, ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo

1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en

el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización²⁴ (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido. Así las cosas, el límite de la responsabilidad de la Aseguradora corresponde a la suma asegurada en la carátula de la Póliza de Seguro de Autos Clónico – Livianos Particulares No. 023056430 / 2658, así:

Coberturas		
Amparos	Valor Asegurado	Deducible
Responsabilidad Civil Extracontractual	4.000.000.000,00	0,00

Documento: Póliza de Seguro de Autos Clónico – Livianos Particulares No. 023056430 / 2658-

Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que sin perjuicio que en el caso bajo análisis no se ha realizado el riesgo asegurado y que el contrato de seguro no presta cobertura por las razones previamente anotadas. En todo caso, dicha póliza contiene unos límites, y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada, y en consecuencia deberá atenderse al límite para el amparo de responsabilidad Civil Extracontractual.

²⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952.

5. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

6. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO

Sin perjuicio de las excepciones formuladas anteriormente, es importante tener en cuenta que el Código de Comercio consagra un régimen especial de prescripción en materia de seguros y en su artículo 1081 establece previsiones no sólo en relación con el tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. En ese sentido, si se acredita transcurrió más de dos años hasta la radicación de la demanda, lo cierto es que el Despacho deberá declarar la prescripción

Para los efectos anteriores, es importante tener en consideración lo preceptuado por el artículo 1081 del Código de Comercio:

“ARTÍCULO 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES>. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Se destaca entonces el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción, como rasgo que diferencia la prescripción ordinaria de la extraordinaria. Pues en tanto la primera exige la presencia de este elemento subjetivo, en la segunda no se efectúa esa distinción. Sobre este particular, y en especial, para establecer la diferencia entre los dos tipos de prescripciones derivadas del contrato de seguro, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil manifestó lo siguiente:

“(…) En este orden de ideas, resulta claro que el legislador colombiano del año 1971, siguiendo un criterio ciertamente diferente al establecido por la legislación civil nacional y buena parte de la comparada –en general-, prohijó para el contrato de seguro dos tipos de prescripción divergentes: la ordinaria y la extraordinaria (…)

La primera, según se acotó en líneas anteriores, de estirpe subjetiva, y la segunda, de naturaleza típicamente objetiva, calidades estas que se reflejan, de una parte, en los destinatarios de la figura sub examine: determinadas personas –excluidos los incapaces- y “toda clase de personas” –incluidos estos-, respectivamente, y, de la otra, en el venero prescriptivo.

Es así, se reitera, cómo en punto tocante al inicio del referido decurso, se tiene establecido que la ordinaria correrá desde que se haya producido el

conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción (el siniestro, el impago de la prima, el incumplimiento de la garantía, (...), al paso que la extraordinaria, justamente por ser objetiva, correrá sin consideración alguna el precitado conocimiento. De allí que, expirado el lustro, indefectiblemente, irrumpirán los efectos extintivos o letales inherentes a la prescripción en comento.²⁵ (Subrayado fuera del texto original)

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que en caso de acreditarse en el transcurso del proceso que la demanda se interpuso en un tiempo mayor a los dos años contados a partir de la ocurrencia del hecho que da base a la acción, no existiría duda alguna que ha operado el fenómeno de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro que se encuentran en cabeza de la parte actora en los términos del artículo 1081 del C.Co.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

7. SUJECIÓN A LAS CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DE LA PÓLIZA.

Es preciso señalar que de acuerdo con lo contemplado en el artículo 1044 del Código de Comercio, Allianz Seguros S.A., podrá proponer a los beneficiarios, la excepciones que pueda alegar en contra del tomador y el asegurado cuando son personas distintas, por tanto, en caso de un fallo en contra este deberá ajustarse de acuerdo con las condiciones pactadas dentro del contrato de seguro, y dicha condena no podrá exceder los parámetros acordados por los contratantes.

Por lo tanto, en caso de que prosperen las pretensiones de responsabilidad civil de los demandantes contra los demandados, tal relación deberá estar de acuerdo con el contrato de seguro denominado Póliza de Seguro de Autos Clonico – Livianos Particulares No. 023056430 /

²⁵ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de febrero de 2002. MP: Dr. Nicolás Bechara Simancas.

2658, con vigencia desde 30 de junio de 2022 y hasta el 29 de junio de 2023.

8. GENÉRICA O INNOMINADA.

Solicito al señor Juez decretar cualquier otra excepción de fondo que resulte probada en el curso del proceso, que se origine en la Ley o en el Contrato con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y prescripción contemplada en el artículo 1081 del C.Co, y cualquier otra causal que pueda corroborar que no existe obligación alguna a cargo de las entidades demandadas y se la exima de toda obligación indemnizatoria, ello en atención a lo reglado por el artículo 282 del Código General del Proceso.

CAPÍTULO III.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE

a. Ratificación de documentos provenientes de terceros:

El Art. 262 del C.G.P., preceptúa que: “(...) *Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (...)*”.

Por supuesto, esta ratificación concebida en la legislación procesal actual, le traslada a quien quiere valerse de documentos provenientes de terceros, el deber de obtener que lo ratifiquen sus respectivos autores, cuando así lo requiere la parte contraria frente a la cual se aportan tales documentos. Resulta lógico que sea quien aporta los documentos provenientes de terceros, quien tenga en sus hombros la carga de hacerlos ratificar de quien los obtuvo o creó, si es que quiere emplearlos como medio de convicción.

Entonces, cabe resaltar que el Juez sólo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya

ratificación se solicita si efectivamente ésta se hace, como lo consagra el citado artículo; y en tal virtud, solicito al Despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante mientras esta no solicite y obtenga su ratificación, y son los siguientes:

- Acta de Declaración Fines Extraprocesales FRANMARY CAROLINA CASERES AZUAJE.
- Acta de Declaración Fines Extraprocesales YUSMARY COROMOTO AZUAJE IDALGO.

b. Solicitud de contradicción del dictamen pericial – Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral expedido por la Junta Nacional de Calificación.

El artículo 228 del Código General del Proceso, con respecto a la contradicción del dictamen, preceptúa lo siguiente:

*“ARTÍCULO 228. CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN. **La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia**, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuentes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor.*”

Si se excusa al perito, antes de su intervención en la audiencia, por fuerza mayor o caso fortuito, el juez recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en nueva fecha y hora que señalará antes de cerrarla, en la cual se interrogará al experto y se surtirán las etapas del proceso pendientes. El perito solo podrá excusarse una vez. (...) – (Subrayado y negrilla por fuera de texto.

De lo transcrito previamente se colige que, las partes podrán solicitar la comparecencia del perito que rindió el dictamen con el objeto de efectuar su contradicción. En ese sentido, encontrándome dentro del término establecido en la norma en mención, solicito comedidamente al Despacho se sirva citar a grupo calificador Diana Elizabeth Cuervo Diaz, Margoth Rojas Rodriguez y Carlota Rosas Ropain quienes elaboraron el Dictamen de PCL, a la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso, a fin de ejercer la contradicción este.

CAPÍTULO IV

MEDIOS DE PRUEBA

Solicito respetuosamente se decreten como pruebas las siguientes:

1. DOCUMENTALES

- 1.1. Copia de la Póliza de Seguro de Autos Clonico – Livianos Particulares No. 023056430 / 2658
- 1.2. Condiciones Generales de la Póliza de Seguro de Autos Clonico – Livianos Particulares No. 023056430 / 2658

2. INTERROGATORIO DE PARTE

- 2.1. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor **LEOPOLDO ALONZO CORTEZ DEL VILLAR**, en su calidad de demandante, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de las contestaciones, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El señor **LEOPOLDO ALONZO CORTEZ DEL VILLAR** podrá ser citada en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
- 2.2. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a la señora **MARYINI KIRIMER FERNANDEZ RODRIGUEZ**, en su calidad de demandante, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de las contestaciones, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La señora **MARYINI KIRIMER FERNANDEZ RODRIGUEZ** podrá ser citada en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
- 2.3. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a la señora **MAYRA LISSETT RODRIGUEZ UZCATEGUI**, en su calidad de demandante, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de las contestaciones, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La señora **MAYRA LISSETT RODRIGUEZ UZCATEGUI** podrá ser citada en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
- 2.4. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a la señora **LAURA VALENTINA TORRADO GOMEZ**, en su calidad demandada, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de las contestaciones, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La señora **LAURA VALENTINA TORRADO GOMEZ** podrá

ser citada en la dirección de notificación relacionada en la contestación de su demanda.

- 2.5. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a la señora **NATALYA SALAZAR RINCON**, en su calidad demandada, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de las contestaciones, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La señora **NATALYA SALAZAR RINCON** podrá ser citada en la dirección de notificación relacionada en la contestación de su demanda.

3. DECLARACIÓN DE PARTE

- 3.1. Al tenor de lo preceptuado en el artículo 198 del Código General del Proceso, respetuosamente solicito ordenar la citación del Representante Legal de **ALLIANZ SEGUROS S.A.** para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda, del llamamiento en garantía y, especialmente, para exponer y aclarar los amparos, exclusiones, términos y condiciones de la Póliza de Seguro de Autos Clonico – Livianos Particulares No. 023056430 / 2658.

4. TESTIMONIALES

- 4.1. Solicito se sirva citar a **JONATHAN STEVEN GIRALDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86086126 y placas 161-209, en su calidad de agente de tránsito, quien realizó el informe de tránsito correspondiente al accidente ocurrido el 14 de abril de 2023, con el fin de que se pronuncie sobre los hechos narrados en la demanda, esclarezca lo que le conste respecto de las narraciones respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrolló el accidente. Lo

anterior, como quiera que el señor **JONATHAN STEVEN GIRALDO** fue quien realizó el informe de tránsito correspondiente al accidente ocurrido el 14 de abril de 2023

JONATHAN STEVEN GIRALDO, podrá ser citado a la dirección Carrera 19C # 37A-17 B. Paraíso Villavicencio, Meta y correo movilidad@villavicencio.gov.co.

- 4.2. Solicito se sirva citar a la Doctora **MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ**, asesora externa de mi representada con el objeto de que se pronuncie sobre los hechos narrados en la demanda, así como de los fundamentos de derecho y de la Póliza de Seguro. Este testimonio se solicita igualmente para que deponga sobre las condiciones particulares y generales de la Póliza, sus exclusiones, y en general, sobre las excepciones propuestas frente a la demanda.

Este testimonio es conducente, pertinente y útil, ya que puede ilustrar al Despacho acerca de las características, condiciones, vigencia, coberturas, exclusiones, etc., de los Contratos de Seguro objetos del presente litigio. La Doctora **AGUDELO** podrá ser citada en la Calle 13 No. 10 -22, apartamento 402 de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico mcamilagudelo@gmail.com.

5. DICTAMEN PERICIAL

Comedidamente anuncio que me valdré de prueba pericial de reconstrucción de accidente de tránsito a fin de ofrecer al despacho una ampliación frente a las circunstancias en las cuales se presentó el accidente, realizando un análisis exhaustivo y detallado de las pruebas que obran en el expediente, para finalmente realizar un estudio de los factores que, según su experticia, determinen la causa eficiente del mismo, entre otros, la trayectoria de lo vehículo, estacionamiento indebido de vehículos, condiciones de la vía, condiciones climáticas, velocidad de los mismas. Esta se solicita y se anuncia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 227 del Código General del Proceso,

pues a la fecha no me es posible aportarla dada la complejidad técnica del mismo.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al despacho que se le conceda a mi representada un término no inferior a dos meses con el fin de aportar dictamen pericial realizado por un perito experto en el tema, el anterior termino, se justifica teniendo en cuenta la complejidad de dicho dictamen, pues se hace necesario realizar un estudio minucioso a fin de lograr la reconstrucción requerida. El dictamen es conducente, pertinente y útil, teniendo en cuenta que el mismo podrá aclarar las circunstancias fácticas que intervinieron en el accidente de tránsito, las cuales, una vez analizadas, podrán determinar la causa eficiente del mismo.

CAPÍTULO IV

ANEXOS

1. Pruebas relacionadas en el acápite de pruebas.
2. Certificado de existencia y representación legal de ALLIANZ SEGUROS S.A., expedido por la Cámara de Comercio de Cali, en el que consta el poder general otorgado al suscrito.
3. Certificado de existencia y representación legal de ALLIANZ SEGUROS S.A., expedido por la Superintendencia Financiera.

CAPÍTULO V

NOTIFICACIONES

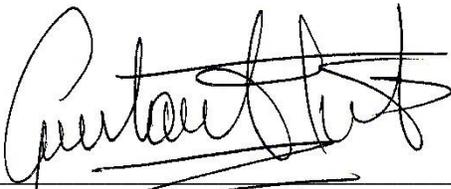
- La parte actora en el lugar indicado en la demanda.
- Mi representada, ALLIANZ SEGUROS S.A. en la Carrera 13 A No. 29 - 24, Piso 9, de la ciudad de Bogotá D.C.

Correo electrónico: notificacionesjudiciales@allianz.co

- El suscrito en Carrera 11A # 94A - 23 oficina 201 de Bogotá D.C.

Correo electrónico: notificaciones@gha.com.co

Atentamente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C.

T. P. No. 39.116 del C. S. de la J.